

**LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO FRENTE AL
RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
OCASIÓN DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.**

**ALEXANDRA QUINTERO PEREIRA
OSCAR ANDRÉS OLARTE PARRA.**

Diretora:

DRA. LAURA SOFÍA ZAMBRANO

Tesis de Maestría para optar por el título de Magister en Derecho Administrativo

UNIVERSIDAD LIBRE - SECCIONAL SOCORRO

Facultad De Derecho

Maestría En Derecho Administrativo

Socorro, Colombia

2019

1. Resumen

El proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC inició luego del acuerdo firmado entre el gobierno colombiano y este grupo armado. Sin embargo, de la cantidad de niños que se encontraban en las filas de las FARC aún no se presentan datos exactos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estima que durante los últimos 17 años alrededor de 3.600 niños se desmovilizaron de los grupos armados al margen de la ley, y según el informe anual de Derechos Humanos por parte de la Organización de las Naciones Unidas, los efectos e implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Este documento señala que esta guerrilla hizo entrega de 135 menores (75 niñas y 60 niños), lo cual corresponde, al cumplimiento de uno de los objetivos planteados y es precisamente la reintegración a la vida civil (ONU, 2018).

Estas cifras son desalentadoras frente a las obligaciones que el Estado ha asumido, y que desde la responsabilidad administrativa pueden enmarcarse dentro de teorías como la falla en el servicio atendiendo al reclutamiento forzado de menores. De allí que sea pertinente realizar un análisis que implique una discusión de teorías que garanticen determinar las obligaciones que tiene el Estado y por ende, las estrategias que debe utilizar para el proceso de reparación integral de aquellos menores que han sido víctimas del conflicto armado y que posterior a ello se han desmovilizado de las filas de los grupos al margen de la ley.

Palabras clave: Responsabilidad del Estado, Reparación integral, reclutamiento forzado, menores combatientes.

Abstract

The process of abandoning weapons by the FARC guerrillas began after the agreement signed between the Colombian government and this armed group, however, the number of children in the FARC is not yet available. The Colombian Institute of Family Welfare estimates that during the last 17 years about 3.600 children demobilized from the illegal armed groups, and by March 20, 2018, the annual report on Human Rights by the United Nations Organization focused on the effects and implementation of the peace agreements with the FARC. This document indicates that this guerrilla group handed over 135 minors (75 girls and 60 boys), which corresponds to the fulfillment of one of the objectives set out and that is precisely the reintegration into civilian life (UN, 2018).

These figures are discouraging in view of the obligations that the State has assumed, and that from the administrative responsibility can be framed within theories such as the failure in the service attending to the forced recruitment of minors. Therefore, it is pertinent to carry out an analysis that implies a discussion of theories that guarantee the determination of the obligations that the State has and, therefore, the strategies that it should use for the process of integral reparation of those minors who have been victims of the armed conflict and who have subsequently demobilized from the ranks of the groups at the margin of the law.

Keywords: State responsibility, Integral reparation, forced recruitment, child combatants.

Tabla de Contenido

Introducción	1
Planteamiento del problema	3
Justificación	6
Objetivos.....	6
Hipótesis	7
Diseño metodológico	8
Capítulo I. Generalidades	10
Antecedentes Legislativos en el Plano Internacional Sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	10
Referentes Legislativos entorno a la Prohibición y Condena del Reclutamiento Forzado como Crimen de Guerra en Colombia.....	17
Capítulo II. Responsabilidad del Estado Colombiano	22
Responsabilidad Extracontractual del Estado Colombiano a partir de la Consagración del Artículo 90 de la Constitución Nacional.	22
La teoría de la falla en el servicio como Título de Imputación de Responsabilidad Extracontractual del Estado por Violaciones a los Derechos Humanos.....	36
Elementos que sirven para establecer la Responsabilidad Extracontractual del Estado por Reclutamiento Forzado de los NNA.....	43
Capítulo III. Reparación Integral	59
La Reparación Integral conforme a los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.....	59
Capítulo IV. Caracterización del proceso de Reparación de Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados del Conflicto Armado: Colombia	70
Conclusiones	100
Referencias Bibliográficas	104

Introducción

El conflicto armado en Colombia entraña un problema social del que se desconoce la verdadera magnitud, entraña dinámicas violentas contrarias a las disposiciones constitucionales y legales que posicionan al ser humano como pilar fundamental del accionar de un Estado, pues se presenta como un contexto en el que se generan una serie de acciones bélicas que trasgreden los derechos humanos de los diferentes grupos poblacionales en especial aquellos que representan vulnerabilidad, situación que se aleja del cumplimiento de los deberes sociales que el Estado tiene por obligación fundados en el respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.

Ahora bien, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional en el marco de los conflictos armados internos han dispuesto la protección de los NNA, desde una doble perspectiva, en su calidad de civiles afectados por las hostilidades y *como sujetos* vinculados a ellas en conflictos armados internacionales y no internacionales, conforme a lo señalado, en el artículo 77 del protocolo I y el artículo 4° del Protocolo II adicionales a los Convenios de Ginebra, respectivamente, se prohíbe el reclutamiento y la participación de menores de 15 años de edad en los conflictos armado (Corte Constitucional, Sentencia C-240, 2009).

El esquema de protección en el ordenamiento Colombiano además de incluir a los menores de 15 años dentro de la edad en la que se entiende reclutamiento forzado extiende tal protección a todos los individuos que se encuentran en la franja cronológica de menores de 18 años, pues no se desvirtúa la prevalencia de los derechos de los NNA, el código penal en su artículo 162 ha consagrado el reclutamiento ilícito como una conducta punible, un marco de

garantías interno aún más amplio que las disposiciones internacionales, que entiende la realidad del contexto de vulneración de derechos en torno al conflicto interno armado.

Según la Corte Constitucional, las conductas de reclutamiento forzado cometidas hasta el 25 de junio de 2005 fecha en que entre en vigor el protocolo facultativo de la convención sobre los Derechos del niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, no son amnistiables ni objeto de indulto o renuncia a la persecución penal a tener en cuenta respecto a los tratamientos especiales de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) , corporación constituida dentro del acuerdo final para la paz que suscribió Colombia con la guerrilla de las FARC. (Comunicado No. 8, 2018)

Así mismo, cabe señalar que este crimen de guerra es una de las formas de victimización que afrontan los NNA al interior del conflicto armado interno, fenómeno que despliega una serie de obligaciones que el Estado debe asumir para minimizar los riesgos que representa la violencia en contra de los NNA en el marco del conflicto, en especial, en aquellas regiones que se han caracterizado por aportar una sinnúmero de hechos violentos producto de los constantes ataques tanto por grupos armados no estatales, estructuras armadas organizadas ilegales de cualquier orden independientemente de su denominación y las instituciones militares y de policía estatales (miembros de la Fuerza Pública) (Defensoría del Pueblo, 2014)

En este orden de ideas, analizar la teoría de falla en el servicio, en el marco del conflicto armado interno, permite entender que el deber del Estado va más allá del mantenimiento de un frente armado que contenga los ataques, pues implica no solo prevenirlos, alejarlos de la población civil, sino también reparar y otorgar garantías de no repetición a todos aquellos que

han sufrido daños convirtiéndose en víctimas del conflicto, y más aún cuando se trata de niños pues estos comportan un grupo especialmente protegido por el derecho internacional, el cual, les ha otorgado un status superior, que a nivel interno es conocido como el *principio pro infans*, vinculante para el actuar de las instituciones estatales.

Esta investigación consta de cuatro capítulos, en cada uno de los cuales se abordará el desarrollo de uno de los objetivos específicos planteados desde una perspectiva crítica de la problemática que se presenta a fin de orientar el escrito hacia la construcción de la solución conciliada con las teorías analizadas y con las dimensiones y características que presenta el reclutamiento forzado como fuente de vulneración de Derechos Humanos al interior del conflicto armado en Colombia.

Planteamiento del problema

La convivencia pacífica, el orden justo, el establecimiento de un contexto de paz duradera, la protección de los derechos fundamentales y la prevalencia de la dignidad humana requieren de una relación estrecha entre el Estado y la sociedad, en la que exista confianza y seguridad en el ente estatal, y en las actividades que ejecutan cada una de las personas jurídicas y los funcionarios a quienes se les ha encomendado actividades en torno al cumplimiento de los fines estatales, la garantía y efectividad de los principios, el mantenimiento de la integridad territorial y la convivencia pacífica.

En Colombia, el conflicto armado interno conlleva la comisión de un sinnúmero de delitos que han sido catalogados como crímenes de guerra, tal como el reclutamiento forzado y la utilización de menores, para el desarrollo de actividades ilícitas que se constituyen en una

flagrante violación a los mandatos, acuerdos y protocolos adoptados por convenciones y tratados internacionales, un actuar que compromete seriamente el papel del Estado en la garantía por los Derechos Humanos y que implica una conducta omisiva y dañosa en cuanto al actuar pasivo que se despliega frente a la prevención de los riesgos, situaciones y causas que originan el reclutamiento forzado.

La falta de certeza y claridad sobre la cifra de los niños que han sido reclutados por los grupos al margen de la ley es otra de las tareas pendientes, según el "Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano" realizado por UNICEF, se expone que las guerrillas han sido el mayor reclutador con 8.701, el 69% total de los casos. Los grupos paramilitares son responsables del 24% con 2.960 casos, los grupos armados post-desmovilización son responsables de 839 casos que corresponden al 7 %, y la fuerza pública con 3 casos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2018)

En La Habana Cuba, tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP llegaron el 24 de noviembre de a un acuerdo de paz que pone fin a más de medio siglo de conflicto (Cosoy, 2016). En efecto, este mismo día se alcanzó un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, que en palabras de los negociadores del mismo era el primer paso para contribuir con los elementos para superar la polarización por cuanto este recoge todas las expresiones políticas y sociales debatidas durante la negociación del acuerdo y además incorpora el programa camino diferencial de vida en el que se incluyen los protocolos para la desvinculación de los NNA reclutados por la guerrilla de las FARC.

El reclutamiento forzado aún con las consideraciones que en la búsqueda de la verdad han relatado víctimas y victimarios frente a los jueces de la JEP (Jurisdicción especial de paz) han desentrañado una realidad que ubica las causas más allá de la misma fuerza ejercida por los grupos armados, pues la voluntad de los NNA de enlistarse, la falta de oportunidades, la deserción escolar, la mismas condiciones de vida han creado un imaginario en los menores que terminan considerando el enlistamiento como una oportunidad de vida, tal como lo señalan los relatos de cerca de 109 jóvenes desvinculados de las FARC en el reciente proceso de paz, emitidas ante el centro de memoria histórica, sin que ello sea óbice para no considerar la responsabilidad que emana en los diferentes actores sociales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018)

No existe tampoco un tratamiento que responda de manera adecuada a este deber de reparación, ni se ha considerado de manera especial a esta población, por lo que se viene acudiendo a reparaciones generales al grupo familiar, o procesos en los que se constituye una fiducia a favor del menor desmovilizado trámite realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y hasta el momento del cumplimiento de su mayoría de edad en la que podrá hacer uso del dinero entregado por concepto de reparación integral de los daños sufridos con ocasión al reclutamiento forzado (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2013).

Partiendo de lo anterior, sería pertinente analizar si se ha reconocido judicialmente la responsabilidad del Estado por los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y de ser así, bajo cuál de las teorías del derecho administrativo se ha soportado los argumentos que disponen la imputación de responsabilidad a cargo del Estado.

En este contexto la presente investigación se centra en dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Qué obligaciones tiene el Estado Colombiano para prevenir el reclutamiento forzado de NNA y para adoptar medidas que garanticen una reparación integral a niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado colombiano, víctimas de reclutamiento forzado?

Justificación

El reclutamiento forzado de menores se trata de un flagelo para los niños/as y adolescentes frente al cual el Estado tiene responsabilidad por su actuar negligente y alejado de las obligaciones que le han sido atribuidas, razón por la cual, esta investigación beneficia a la comunidad pues permite entender la teoría de la falla en el servicio desde los postulados del derecho administrativo a partir del riesgo que genera el conflicto armado interno para los niños, niñas y adolescentes reclutados, y considerando que el Estado tiene el deber de cumplir con ciertas obligaciones legales, constitucionales y convencionales que disminuyan y eliminen las fuentes de vulneración de los derechos en la medida en que la población en medio del conflicto sufre los ataques que los grupos armados despliegan, entre ellos el reclutamiento forzado de menores, una tragedia que deja marcas imborrables pero que deben ser atenuadas con un actuar adecuado por parte del Estado.

Objetivos

Objetivo general

Establecer la ocurrencia de responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho victimizante de reclutamiento forzado al interior del conflicto armado, y el alcance de la obligación de reparación por los daños derivados de este hecho.

Objetivos específicos:

- Describir la teoría de la Responsabilidad del Estado por falla en el servicio frente al reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado.
- Identificar el alcance del concepto de reparación integral de NNA a partir de decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Analizar el proceso de reparación que en Colombia se aplica frente a niños niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del conflicto armado.

Hipótesis

En cuanto a las hipótesis se consideran dos. La primera indica que el Estado en torno al principio *pro infans* no ha adelantado las acciones suficientes para atender su rol de garante de los Derechos Humanos uno de los factores que condicionan la vinculación de los menores a las filas de los grupos al margen de la ley, así mismo la falta de satisfacción de las necesidades básicas, la omisión en la prestación de los servicios públicos como la seguridad, la educación y la salud son condiciones que propician la incursión a los grupos armados.

La segunda, se enmarca en que el Estado viene atravesando una etapa transicional a partir de la implementación de la Ley 1448 de 2011 en cuanto a los procesos de reparación integral de los hechos victimizantes al interior del conflicto armado, incluido el reclutamiento forzado, siendo necesario abordar el tema desde las obligaciones convencionales y legales para implementar acciones que permitan realizar una reparación integral diferencial en la que se individualice a los sujetos de reparación y se les otorgue cada una de las medidas que se ha dispuesto como una reparación integradora.

Diseño metodológico

El diseño metodológico para el desarrollo del presente proyecto de investigación es de tipo teórica con un enfoque cualitativo, a través de la cual se realiza una revisión jurídica en torno al tema del reclutamiento forzado de menores, así como la responsabilidad que atiende al Estado por los hechos que se ejecutan en medio del conflicto interno armado, y que generan la necesidad de establecer un proceso que garantice la reparación integral de los daños ocasionados.

El método de investigación seleccionado permite describir cualitativamente el fenómeno de reclutamiento forzado desde el análisis de los postulados que la doctrina y la legislación nacional e internacional han dispuesto en torno al tema, y además establecer una interpretación hacia la discusión del tema propuesto y con ello la proposición de estrategias que determinen la forma adecuada de actuar y se dirijan a superar la ineficacia de la legislación frente a ciertos temas.

La recolección de la información que sirve para construir cada uno de los marcos y capítulos de este proyecto será enfocada en la definición de algunos conceptos jurídicos que se encuentran inmersos en las disposiciones que regulan la reparación integral de los niños y niñas desvinculados del conflicto interno armado, las obligaciones que atienden al Estado desde el análisis de la teoría de la falla en el servicio los cuales serán soportados desde los postulados introducidos mediante bloque de constitucionalidad y en especial de la jurisprudencia nacional y la expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual comporta un elemento esencial y vinculante.

Las fuentes documentales consultadas se caracterizan por ser fuentes primarias y secundarias tales como Tratados Internacionales, la Constitución Política, la legislación interna, decretos y normativa en general. Además de ello se extraerá información de otras fuentes documentales como tesis publicadas, trabajos de grado, revistas, periódicos online, libros y escritos, entre otros, que permitan contrastar el problema de investigación y la hipótesis planteada.

Capítulo I. Generalidades

Antecedentes Legislativos en el Plano Internacional Sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Las normas de rango internacional que versan sobre Derechos Humanos son integradas al ordenamiento jurídico colombiano por medio del bloque de constitucionalidad, dependiendo del tipo de obligaciones a las que corresponde, lo cual permite, que normas de rango internacional para las que se ha surtido el trámite correspondiente ingresen al ordenamiento jurídico colombiano en el mismo nivel de la Constitución y por ende sean de obligatorio cumplimiento. Esta importante figura se fundamenta en el papel predominante que ejerce el artículo 93 de la Carta Constitucional, cuando dispone que:

Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Constitución Política de Colombia, 1991, Artículo 93).

Atendiendo a lo señalado, es posible mencionar que el bloque de constitucionalidad hace referencia a la existencia de normas de rango constitucional que no aparecen directamente en el texto de la carta política, lo cual implica entender que una constitución no solo corresponde al articulado que se incorpora sino a otras normas que de manera supralegal coexisten y que en muchos casos pueden superar al texto constitucional (Uprimny, 2000, p.2).

Por lo anterior, es pertinente mencionar aquellos postulados normativos que hacen parte de la legislación nacional y en especial aquellos que con ocasión de la protección de los derechos

de los niños, han incorporado elementos que prevalecen para garantizar sus derechos frente a los derechos de los demás, disposiciones que implican entender las falencias existentes en el Estado cuando se parte de la existencia de flagelos como el reclutamiento forzado como crimen de guerra.

El contexto normativo internacional frente a la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes tiene su génesis en el año 1923, en el que se aprueba la primera declaración de los derechos del niño denominada la (Declaración de Ginebra), los que serían reivindicados posterior a la terminación de la segunda guerra mundial, tras analizar los diversos eventos en los que los niños eran utilizados en medio de las hostilidades.

La Declaración de Ginebra argumentó sobre la necesidad de disponer de normas desde el Derecho Internacional Humanitario, como mecanismo de salvaguarda, para ello se dio paso a la redacción del IV convenio de Ginebra el día 12 de agosto de 1949, relativa a proteger a los civiles, entre ellos a los niños víctimas de la guerra reconociéndolos como sujetos de derechos por la vulneración que representa la existencia de un conflicto latente en el contexto en el conviven (Rodríguez, 2011).

La Declaración de Ginebra, en el artículo 50 dispone las medidas que los Estados que han ratificado la declaración deberán desarrollar para garantizar los derechos de los niños en medio de los conflictos armados, entre ellas menciona que las autoridades nacionales y locales deben facilitar la identificación de los niños mediante el registro de su filiación, y cuando la misma sea dudosa las autoridades están en la obligación de adelantar los procedimientos médicos a que haya lugar, a partir de ello, se debe establecer una sección especial que permita medidas

oportunas para garantizar la manutención y educación de los niños separados de sus padres a causa de la guerra.

La falta de una legislación permanente y la necesidad de crear un organismo de protección para la infancia permitió que en el año de 1946 se creara en el ámbito de las Naciones Unidas el Fondo para la Infancia (UNICEF), organismo que funciona como una fuerza impulsora que permite la creación de un contexto en el que el respeto por los derechos de los niños sea un principio orientador de las funciones públicas. Por lo anterior, dicha organización ha sido dotada de autoridad e independencia para influir sobre aquellos que cuentan con la facultad para tomar decisiones frente a las políticas que regirán la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Unicef, 2013).

Posteriormente, se estableció la “Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio”, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión por la asamblea general el 9 de diciembre de 1948, en su artículo II establece que se entiende por Genocidio, entre otros actos, el traslado por fuerza de niños de un grupo a otro, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo entre otras.

La aprobación en el año 1959 de la Declaración de los Derechos de los niños, la cual supuso el primer gran consenso sobre los derechos de los niños, consagrados en diez principios que reconocen plenamente al niño como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral, con dignidad y libertad. Este instrumento fue el inicio para una consagración importante de derechos y para considerar la necesidad de establecer un marco jurídico vinculante, que daría lugar a la positivación del interés superior del niño.

La convención Americana sobre Derechos Humanos también denominada Pacto de San José del 22 de diciembre de 1969, entrando en vigencia el 18 de julio de 1978 ha sido catalogada como uno de los pilares fundamentales del sistema interamericano de Derechos Humanos. En el Artículo 19 establece los derechos del niño y la obligación de los estados para establecer medidas de protección.

Los protocolos I y II de los Convenios de Ginebra adoptados el 8 de junio de 1977, son tratados internacionales que complementaron los convenios de Ginebra, una mejora significativa a la protección jurídica conferida a los civiles y los heridos, por primera vez, se establecen normas humanitarias que son aplicables a los conflictos armados, fueron adoptados por los estados para que el derecho Internacional Humanitario fuera más universal y respondiera a los conflictos internos modernos.

Por consiguiente, el Protocolo I se refiere a los conflictos armados internacionales; el Protocolo II, a los conflictos armados no internacionales, una diferenciación que permitía entender las obligaciones que conlleva para los estados frente a los combatientes y civiles, precisando que por ningún motivo estos últimos pueden ser atacados pues no se constituyen como objetivos militares.

Los protocolos I y II han revestido importancia significativa a partir del entendido que en tiempo de guerra los que más sufren son los civiles, por ende la obligación consiste en proteger a los civiles contra los peores efectos de los conflictos, una norma que se ha convertido en un hito a

partir de los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, a fin de brindar mayor protección.

En el año 1989 se adoptó la Convención Internacional de los derechos de los niños, con el propósito de establecer las obligaciones de los Estados parte. Se constituye, sin duda, el instrumento internacional más importante sobre los derechos de los niños que establece que:

1. Los Estados Parte se comprometen a respetar y velar porque se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.
2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Parte se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Parte procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Parte adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado (Convención sobre los Derechos de los Niños, 1989, Artículo 38)

Las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en diversos territorios entre ellos la antigua Yugoslavia, Rwanda y Sierra Leona, dio lugar a que en el año 1993 el cuerpo de la organización de las Naciones Unidas estableciera en cumplimiento de su Consejo de

Seguridad, un tribunal internacional para la antigua Yugoslavia con la finalidad de juzgar las violaciones a derechos humanos cometidas a través de actos criminales durante el año de 1991.

Al tribunal constituido se le otorgó una jurisdicción de rango internacional para perseguir y procesar a las personas naturales culpables de graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949, Violaciones de las Convenciones Internacionales sobre la guerra y la costumbre internacional acuñada desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con respecto a las disposiciones que protegen a los niños niñas y adolescentes, el tribunal dispuso que dentro de los crímenes contra la humanidad y genocidio, se encuentra tipificado los traslados forzosos de niños del grupo a otro grupo establecido en el artículo 4 numeral (e).

El Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda tenía como competencia juzgar a los presuntos responsables de violaciones del derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, así como a los ciudadanos ruandeses presuntamente responsables por tales actos o violaciones cometidas en el territorio de Estados vecinos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1994. En el artículo 4 se establece como graves violaciones al artículo 3 común a los convenios de Ginebra y el protocolo adicional II de los convenios, por consiguiente en el numeral e se dispone que se enjuiciará a las personas que cometan u ordenen ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes o degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier otra forma de agresión indecente.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), el cual menciona en su preámbulo la existencia de millones de niños, mujeres y hombres que han padecido crímenes atroces, por los cuales se requiere la adopción de medidas en el plano local que garanticen que

tales hechos no queden impunes, y además reafirmando los propósitos de la carta de las Naciones Unidas en la que se previene a los Estados a recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Seguidamente la Organización Internacional del trabajo (1999) mediante el convenio No. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil incluyó dentro de estas el trabajo obligatorio o forzoso, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, un programa creado para ayudar a los estados miembros en la implementación de las medidas necesarias para eliminar estas formas de trabajo infantil, haciendo énfasis en los casos en los que se pueda ofrecer apoyo a los niños víctimas como cuando son sometidos al reclutamiento forzado por grupos militares.

En los pronunciamientos del año 1999, dispuestos en la sentencia niños de la calle (Villagrán Morales y otros) Vs Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso; que el reclutamiento de menores de 18 años se constituye en una clara violación a los Derechos Humanos, por ello, condenó al Estado de Guatemala por concepto de daño material con ocasión a la detención de cuatro jóvenes lo cual está expresamente prohibido cuando no se cumplen los presupuestos legales.

Por ende, la Corte Interamericana ha requerido de un compromiso a cargo de los Estados para ejecutar acciones efectivas que garanticen la persecución e imposición de sanciones a los infractores, además de la incorporación de políticas públicas en las que se impida que las fuerzas militares del Estado enlisten menores de 18 años.

El Estatuto de Roma estableció la Corte Penal Internacional en el año 2002, y a su vez dispuso en relación con los NNA en el artículo 8 capítulo crímenes de guerra, que el reclutamiento, enlistamiento de niños menores de 15 años de edad o su utilización para participar activamente en cualquier clase de hostilidades está tipificado como un crimen de guerra, que de igual forma se requiere la persecución y condena de los responsables de los hechos punibles para evitar impunidad.

Para el caso de Colombia y con respecto al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la fiscal de la Corte Penal Internacional ha hecho diversas advertencias al gobierno Colombiano, entre ellas el considerar que lo contemplado en el acuerdo con las FARC, no es suficiente en especial con la llamada justicia transicional y la posibilidad de no aplicar penas como una amnistía técnica a responsables de crímenes de guerra.

A su vez, en la Ley 1820 de 2016, en el artículo 23 párrafo a, refiere que en ningún caso será objeto de amnistía o indulto la sustracción de menores y el reclutamiento de menores, lo cual eventualmente daría lugar a que la Corte Penal Internacional abocara el conocimiento de estos delitos si se considerara que el Estado no aplicó la justicia debida contra los responsables.

Referentes Legislativos entorno a la Prohibición y Condena del Reclutamiento Forzado como Crimen de Guerra en Colombia.

La Constitución de 1991 ha dispuesto como principio fundamental para garantizar los derechos de los niños es el artículo 44, que establece una protección prevalente, de acuerdo con la interpretación de la Corte Constitucional de Colombia, ubica a los niños en un estado de vulnerabilidad en razón de su inmadurez física y psicológica, por ende, para su desarrollo integral

requieren de una mayor atención y un trato preferente por parte del Estado, este mandato es de estricto cumplimiento.

La Ley 548 de diciembre 23 de 1999, que prorrogó durante tres años (hasta el 23 de diciembre de 2002) la vigencia de la Ley 418 de diciembre 26 de 1997, prohibió el reclutamiento de menores de 18 años para la prestación del servicio militar. La Ley 548 eliminó la única excepción a la regla de la mayoría de edad contemplada por la Ley 418, “por la que los estudiantes de undécimo grado podían alistarse con el consentimiento de sus padres antes de cumplir 18 años”.

La ley 599 de 2000 denominada Código Penal, en su artículo 162 dispone que el reclutamiento ilícito se configura cuando con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, se reclute menores de dieciocho (18) años o se les obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las normas consagradas en el código penal aseguran la tipificación y condena de las conductas proscritas por la comunidad internacional frente a delitos como el reclutamiento y utilización de los menores en medio de los conflictos armados. Se trata de un delito que también tipifica actividades como el servir de correo, mensajero, cocinero al interior del grupo armado, lo cual, queda protegido frente a esta disposición. (Corte Constitucional, sentencia C-240, 2009)

A su vez, la sentencia de 8 de julio de 2004, caso de hermanos Gómez, Paquiyauri vs Perú, en la cual se impone al Estado la obligación de adoptar medidas de protección requeridas

para la condición de niños, entre ellas, ha de referirse las que atienden a la prohibición de la tortura, la discriminación, y a las condiciones que deben observarse en casos de la privación de la libertad de niños, lo cual refiere la existencia de un procedimiento de reparación que permita la protección del interés superior del niño

Tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como la Constitución Política Colombiana, y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), reconocen que los niños y niñas son titulares de derechos y estos prevalecen sobre los derechos de los demás, por cuanto se desarrollan a partir del principio del interés superior del menor (*principio pro infans*) como herramienta jurídica para garantizarlos en todas y cada una de las decisiones.

Tras la entrada en vigencia del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño Relativo a la Participación de Niños en conflictos armados,¹ se modificó la edad para la vinculación de los jóvenes a los grupos armados elevándola a 18 años, debido a que la Convención Sobre los Derechos del Niño contemplaba como edad mínima los 15 años.²

¹COLOMBIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, Compilación de la Normativa internacional y nacional en materia de Derechos de los Niños, las Niñas y Adolescentes. Bogotá Escala S.A., Inti Alonso, 2013 pág.158 Protocolo Facultativo de la Convención sobre Derechos del niño Relativo a La Participación de los Niños en Conflictos Armado **Artículo 2** Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a ningún menor de 18 años. **Artículo 3 . 1.** Los Estados Partes elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño 1, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial. **2.** Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción. **3.** Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales cde menores de 18 años establecerán medidas de salvaguardia que garanticen, como mínimo, que: **a)** Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario; **b)** Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de quienes tengan la custodia legal; **c)** Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio militar; **d)** Esos menores presenten pruebas fiables de su edad antes de ser aceptados en el servicio militar nacional

²UNICEF. Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. Bogotá, Gente Nueva, 2006 Pág. 36 ,37 Art 38 2. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.³ Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. SI reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados Partes procuraran dar prioridad a los de más edad. Protocolo adoptado por Colombia el 25 de mayo del año 2005, que prohíbe el reclutamiento obligatorio de niños y niñas menores de 18 años en las Fuerzas Armadas estatales (Corte Constitucional, sentencia de 1 de abril de 2009 (expediente D 7411) .

Lo anterior establece, una imperiosa obligación por el respeto al principio denominado interés superior de los niños y niñas, implicando entre otras cosas adoptar medidas de protección, prevención y satisfacción integral de sus derechos, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Ley 1098 de 2006, pues, se busca que la legislación otorgue efectividad y exigibilidad a los derechos que les son inherentes.

En el año 2008, Colombia aceptó acogerse al proceso de supervisión de informes contemplados en la Resolución 1612 de 2005, expedida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,³ referente a los derechos de los niños que se encuentran en zonas en donde los índices de delitos cometidos por menores en el marco del conflicto armado son elevados, y por ello, se requiere de un proceso de registro, monitoreo, supervisión y reporte actual de los hechos cometidos por los menores a fin de entender la situación real y proceder a las medidas restaurativas y de responsabilidad a que haya lugar.

El cumplimiento de la resolución antes mencionada prevé como propósito general la recopilación de información que contenga las cifras y datos de las violaciones de los derechos de los niños y las niñas, además de las políticas de prevención del reclutamiento que el Estado debe consolidar, para garantizar a los niños una vida alejada de las armas, de la guerra y de la crueldad de los grupos al margen de la ley (Mariño, 2012, p.81).

En la sentencia C- 007 del 1 de marzo de 2018, se dispone declarar exequible la expresión en la que se hace referencia al “reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el

³NACIONES UNIDAS CONSEJO DE SEGURIDAD. Resolución 1612 (julio 25 de 2005). Por la cual se establecen los procedimientos para monitorear la situación de los niños y niñas víctimas de los conflictos armados y por medio de ello incidir en la garantía de los derechos. La Resolución pide de los Estados parte que pongan en marcha sin demora el mecanismo de supervisión y presentación de informes y que lo haga aplicable dentro del marco de los recursos existentes y en estrecha consulta de la situación del conflicto armado interno.

Estatuto de Roma” (Ley 1820 de 2016, artículo 23), en el entendido de que las conductas que constituyan ese delito, cometidas hasta el 25 de junio de 2005 no son susceptibles de amnistía, indulto ni renuncia a la persecución penal, si el sujeto pasivo es una persona menor de 15 años de edad; a partir de ese momento, no lo serán aquellas en las que el sujeto pasivo es una persona menor de 18 años (Corte Constitucional, Sentencia C-007, 2018).

En síntesis, el ordenamiento jurídico Colombiano ha dispuesto una serie de disposiciones en las que se establece la protección integral a los NNA frente a todo acto que ponga en riesgo la garantía de sus derechos humanos, para ello, establece las obligaciones que atiende al Estado en torno a eventos como el conflicto interno armado evitado en todo caso que sean objeto de algún hecho victimizante entre estos el reclutamiento forzado. A su vez se establece la responsabilidad que atiende al Estado frente a las víctimas de reclutamiento forzado y el deber que le asiste de reparar integralmente a los NNA que por cualquier motivo abandonen en cualquier condición y los grupos al margen de la ley, una reparación que corresponda a elementos diferenciales y responda a las disposiciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha consagrado.

Capítulo II. Responsabilidad del Estado Colombiano

Responsabilidad Extracontractual del Estado Colombiano a partir de la Consagración del Artículo 90 de la Constitución Nacional.

La adopción de la forma de Estado Social y de Derecho a partir de la promulgación de la Constitución de 1991 supone la concreción de una serie de garantías para el ciudadano, a las que se les ha otorgado un valor superior por tratarse de condiciones que permiten la armonía entre la existencia de un Estado como representación material de un pueblo y un grupo de coasociados que demandan de esta institución social la salvaguarda de sus derechos fundamentales y con ello la satisfacción de sus necesidades.

El Estado visto como la asociación perfecta en la que los hombres libres se unen para una utilidad común y para gozar de sus derechos, con una organización en la que existe un supremo poder facultado para crear el derecho positivo, lo cual implica, que cada una de las actividades que desarrolla el Estado colombiano en las diferentes ramas del poder público pueden desencadenar responsabilidad a su cargo si las acciones realizadas generan daños antijurídicos en el ejercicio de las funciones encomendadas por la administración.

Es así, como el artículo 90 de la mentada Carta Política, se incorporó la responsabilidad patrimonial del Estado, la cual se materializa a partir del daño antijurídico que en el ejercicio de sus funciones cause por acción u omisión un funcionario público, por cuanto la responsabilidad estatal encuentra su fundamento en el principio que busca garantizar la eficiencia de todos los servicios públicos, dentro del marco de corresponsabilidad y de cooperación entre el Estado y los particulares.

La responsabilidad patrimonial del Estado, contempla un principio de garantía integral del patrimonio de todos los ciudadanos, que ha sido previamente consagrado en el artículo 2 de la Carta Constitucional en el que se señala la obligación a cargo del Estado de proteger a todas las personas residentes en el territorio nacional en su vida, honra y bienes, a su vez, con esta carta política se produjo la constitucionalización de la responsabilidad del Estado, como garantía de los derechos e intereses de los administrados y su patrimonio.

La interpretación de este artículo constitucional, permite extraer los elementos cuya acreditación se hace necesaria para que proceda la declaración de la responsabilidad del Estado sin importar el título de imputación, por ende, se requiere de un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extra-patrimonial, que debe ser cierto y determinado o determinable, que se causa a uno o a varios individuos; además del daño, se requiere de una conducta activa u omisiva, imputable a una autoridad pública, es decir, que como consecuencia de una acción u omisión se pueda imputar el daño a la entidad accionada (Ruiz, 2014).

A pesar de que el artículo 90 constitucional establece que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”, no existe en la legislación una definición clara de lo que corresponde al daño antijurídico. No obstante, la jurisprudencia de las altas Cortes se ha encargado de definir tal concepto expresando que es “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra-patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación” (Consejo de Estado, Expediente N° 22366, 2012)

Por consiguiente, el sentido otorgado al texto constitucional mencionado, resalta la voluntad del constituyente de colocar la institución de la responsabilidad del Estado como una garantía constitucional, como una declaración por cuya virtud se hace visible el deber de responder por los daños que causen sus autoridades en determinadas circunstancias a los administrados a quienes por mandato constitucional se les debe reparar los daños en la medida en que se permita retornar a quién sea víctima a la condición inicial, antes de la ocurrencia u omisión de una conducta que dio lugar a un daño (Irisarri, 2000)

En este contexto, es claro que la responsabilidad patrimonial se soporta únicamente en los dos elementos ya referidos, lo cual dispone un mandato imperativo que ordena al Estado responder por los eventos en que actúa y en los que su falta de actuación causa perjuicio a uno de sus administrados y además establece distinciones de acuerdo a los ámbitos de aplicación de las autoridades públicas, los cuales pueden ser de tipo contractual, precontractual o extracontractual (Consejo de Estado, Expediente No. 8.118, 1995).

Dentro de la responsabilidad patrimonial del Estado el primer paso es la determinación del daño antijurídico, y el segundo corresponde a la imputación y las transformaciones del mundo jurídico dentro de la sociedad, y a partir de ello, encuadrar este hecho dentro del régimen de responsabilidad extracontractual que el derecho administrativo ha dispuesto.

La existencia de un daño antijurídico conlleva una determinación del juez de ser un tipo de daño que vaya más allá de lo que normalmente debe soportar una persona por el simple hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada en la que es su responsabilidad comportarse como un sujeto solidario, pero no implica ello que deba aceptar cargas excesivas que le pueden

causar consecuencias en su patrimonio que dan lugar a una indemnización (Consejo de Estado, Expediente No. 13168, 2006).

El daño antijurídico es una noción a la que doctrinariamente se le ha atribuido complejidad, integrado por dos términos el daño y antijurídico, el primero entendido como el perjuicio o menoscabo que sufre la víctima, el cual puede ser de carácter patrimonial afectación o personal que se deba y pueda probar la víctima, además requiere la existencia de un nexo causal entre el hecho culposo y el daño que se ocasione, a fin de que el juez pueda probar la existencia del mismo y determine la responsabilidad de tipo contractual o extracontractual.

Con respecto al concepto de antijurídico refiere a la conducta de hacer u omitir, la vinculación existente entre una conducta con un suceso acaecido o con un estado de cosas lo que determina el juicio de antijuridicidad, por ello el actual régimen constitucional establece a partir de los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por acción u omisión de las autoridades públicas la obligación jurídica a cargo del Estado de responder, originando un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio de una de las medidas de reparación integral denominada indemnización (Corte Constitucional, Sentencia C-333, 1996)

El análisis del daño antijurídico es el punto relevante de la responsabilidad del Estado, como lo ha sostenido Henao (1998) el daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última de la responsabilidad civil, esto significa que no es posible la responsabilidad del Estado sin un daño, el cual ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado que debe ser directo, persona y cierto, además para que el daño sea resarcible o indemnizable debe reunir características de ser un daño cierto, concreto o determinado y personal, que se tenga

plena certeza de que se ocasionó un perjuicio, lo que implica, que no puede ser hipotético o eventual, en suma debe ser un perjuicio cierto (Gil, 2013).

Una vez determinado el daño antijurídico y evidenciadas las características que este debe conllevar, se plantea el juicio de imputación, en el que ha de analizarse la distribución fáctica y jurídica en tres escenarios: el peligro, amenaza y daño. La atribución jurídica debe hacerse en un solo título de imputación, por lo que se hace necesario que en cada caso particular se determine si el elemento fáctico constituye una falla en el servicio, en la que deba enmarcarse la responsabilidad extracontractual a cargo del Estado, la cual se soporta en la vulneración a los deberes normativos, materializados como la tutela efectiva de los derechos, bienes e intereses jurídicos (Consejo de Estado, Expediente No. 31412, 2015).

La declaración de responsabilidad a cargo del Estado, debe considerarse no solo como una herramienta que persiga una reparación, sino como un mecanismo para que los administrados soliciten la tutela de los deberes que debe cumplir la administración fundamentados en la Carta Constitucional, cuando se ocasiona un daño antijurídico mediante la realización de una acción que resulta dañosa o mediante la abstención de una acción, un mecanismo para generar estrategias preventivas que permitan una optimización de la actividad administrativa hacia la formulación de políticas públicas efectivas.

Una vez expuestos los anteriores argumentos en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado y los elementos que la configuran, conviene señalar los eventos que al interior de situaciones como el conflicto interno armado que ha padecido Colombia suceden y que ubican a la población en un riesgo inminente frente a la vulneración de sus Derechos Humanos, caso particular el delito de reclutamiento forzado, un flagelo que obedece a

un número plural de causas inmersas en las dinámicas sociales y económicas, que abruptamente genera cambios en el desarrollo integral de los menores visto como el proyecto de vida y además causa secuelas que con dificultad pueden ser reparadas.

El Estado colombiano, sin ser el autor directo del reclutamiento forzado de NNA, si es el encargado de esclarecer las fuentes de riesgo que genera, de perseguir, disminuir, acorralar, combatir, sancionar, dejar sin la posibilidad de efectuar acciones bélicas, poner en marcha todas las estrategias posibles para evitar que la población civil y en especial NNA sean víctimas, consolidar una política pública de prevención del reclutamiento forzado, la utilización uso y violencia sexual, las rutas de atención y el fortalecimiento de las dinámicas sociales para la garantía de la eliminación derechos o amenazas al derecho a ser protegido contra el reclutamiento forzado.

La imputación de responsabilidad para el Estado en caso del delito de reclutamiento forzado de menores ha sido definida a partir de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la ley 1098 de 2006, en consideración al principio orientador denominado interés superior del niño, que obliga a todas las personas en corresponsabilidad a garantizar la satisfacción integral y simultanea de todos los derechos de los NNA que son independientes, prevalentes y universales.

Con ello se ratifica la obligación del Estado a partir de las obligaciones encomendadas, entre estas, la garantía de los servicios públicos de seguridad, de educación y salud, la satisfacción de las necesidades básicas y demás condiciones inherentes que permita a los NNA una protección integral de sus derechos fundamentales, la exclusión de los escenarios peligrosos

como el conflicto armado y la prevención de toda forma de violencia , dichos elementos encajan dentro de las teorías de responsabilidad extracontractual descritas en la doctrina del derecho administrativo en cuanto al fundamento de la prestación a cargo del Estado de un buen servicio público y por el contrario un escenario de falencias, de ejecución de actuaciones irregulares y omisivas de la administración generadoras de perjuicios. (Gil, 2010, p.448).

El reclutamiento forzado de NNA se puede analizar a partir de contextos como el abandono total de la fuerza pública de su obligación de prestar seguridad, el cual ha sido determinado por el Consejo de Estado como un abandono deliberado, una omisión al cumplimiento de los deberes constitucionales de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades entre estas asegurar que los habitantes del territorio nacional convivan en paz, pues resultaría inocuo pretender la responsabilidad del Estado por el hecho exclusivo de un tercero al que como se ha mencionado es su deber mantener alejado de la población civil (Salamanca, 2017).

En concordancia, el deber del Estado frente a la protección de los NNA contra el delito de reclutamiento forzado involucra unas rutas de prevención que se deben adelantar para preservar y mantener el disfrute y goce efectivo de los derechos de los NNA, creadas en el CONPES 3673 de 2010 en tres ejes, el primero de ellos corresponde precisamente a la prevención temprana entendida como la obligación a cargo del Estado de combatir, de minimizar, de alejar de la población civil, los riesgos que se presentan a partir de la incursión de grupos armados al margen de la ley, esto implica que las acciones deben desarrollarse desde el principio de corresponsabilidad.

Esta ruta hace referencia al deber de corresponsabilidad, vista como la prevención que involucra la capacidad de las instituciones, las comunidades, las familias y los mismos niños, niñas para que en conjunto se adelanten las estrategias necesarias para prever las amenazas que conlleva el reclutamiento forzado y por ende, disponer las medidas para la prevalencia del derecho a ser protegido contra el uso, utilización y reclutamiento forzado.

La corresponsabilidad ha sido definida por la Ley 1098 de 2006 en el artículo 10 como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. No obstante lo anterior, las instituciones públicas y las entidades del Estado encargadas de garantizar los derechos a los NNA están obligadas a la prestación de los servicios sociales y por consiguiente, la corresponsabilidad está lejos de ser un argumento a invocar por parte de la administración para negar la atención y responsabilidad que atiende para la preservación del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

El principio de la corresponsabilidad en un Estado social y de Derecho expresa los deberes en cabeza del Estado de propiciar las condiciones suficientes para que los ciudadanos obtengan la protección de sus derechos y a su vez deberes de los ciudadanos de colaborar en lograr que se cumplan los objetivos que el Estado busca alcanzar. Así las cosas la noción de corresponsabilidad se fundamenta en una expresión de la democracia participativa, atendiendo a que la gestión pública requiere de la sociedad civil para una efectiva gestión de lo público, por cuanto se trata de una suma de voluntades y recursos en torno al cumplimiento de reglas que son de interés general.

El segundo eje detalla la prevención urgente, en un escenario que es anterior a la prevención temprana y se dirige a realizar una protección integral a la población que se encuentra en áreas de amenaza colectiva, en donde previamente se han identificado los riesgos latentes que requieren una atención en corresponsabilidad involucrando las autoridades municipales, los líderes comunitarios, los representantes del sector educativo, las familias y la comunidad en general.

La ruta termina mencionando el eje prevención en protección en referencia a las situaciones en las que es altamente probable que se presente la vulneración del derecho a ser protegido contra el reclutamiento, uso y utilización en el contexto en que se desarrollan hechos concretos y específicos contra NNA, situación que requiere el acompañamiento de la unidad para la Atención y Reparación de las víctimas cuando el caso involucra la red adulta o si se requiere la movilización de los niños y niñas será el Bienestar Familiar quien realice los trámites inmediatos frente a la inminente medida de protección para salvaguardar sus derechos.

Los deberes permanentes que en torno a esta garantía de seguridad, protección y prevención del reclutamiento forzado se atribuyen al Estado obedecen a la dinámica que afectan a los NNA al interior de las filas de los grupos al margen de la ley, interrumpiendo abruptamente su desarrollo normal y sano en aspectos psicológico, físico, intelectual y moral, un concepto que la Corte Constitucional ha manifestado es relacional y dirige el actuar estatal a la posibilidad de armonizar en situación de conflicto los derechos e intereses de los NNA (Corte Constitucional, C-055, 2010)

Otro elemento en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado que sostiene el Consejo de Estado como necesario distinguirá partir los ámbitos de operatividad y el contenido de las nociones de causalidad, como un requisito estricto para consolidar el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado, para lo que esta corporación ha indicado que:

Es precisamente, el territorio de la responsabilidad por omisión aquél en el cual resulta más relevante dicha distinción, comoquiera que frente a eventos en los cuales se pretende deducir responsabilidad del Estado como consecuencia de un no hacer, el correspondiente examen de causalidad se desenvuelve en un plano meramente hipotético, pues el auténtico análisis sobre la procedibilidad de atribuir la obligación resarcitoria al ente demandado debe realizarse en el terreno de la imputación (Consejo de Estado, Radicación No. 17613, 2011)

En tratándose de la responsabilidad que deviene para el Estado por la omisión de algunas de las obligaciones a su cargo, el estudio de la relación de causalidad se hace insuficiente, y la imputación surgirá a consecuencia del resultado lesivo que se presenta, atendiendo a que el Estado tenía el deber jurídico de evitarlo poseyendo la acción debida, pero no realizó las acciones pertinentes.

En este orden de ideas, el resultado lesivo del reclutamiento forzado es diverso en los NNA víctimas quienes padecen severos daños físicos y psicológicos, asociados a su participación en ejecuciones sumarias, torturas, asesinatos, ataques a civiles, además están expuestos a todo tipo de enfermedades, cansancio o agotamiento físico y mental, violencia sexual, graves heridas causadas en medio de los enfrentamientos armados o por los extenuantes recorridos por áreas geográficas de difícil acceso, muerte repentina, tortura a manos de los

contrarios, y en un porcentaje mayor las niñas y adolescentes son sometidas a esclavitud sexual y a practicarse abortos (Comisión Colombiana de Juristas, 2009).

Un diagnóstico del resultado lesivo que se ocasiona a los NNA que han sido víctimas del reclutamiento forzado fue realizado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en apoyo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, en 17 departamentos de Colombia, realizaron investigación en la que participaron cerca de 1680 menores en edades entre los 8 y 17 años, a los mismos se les pudo evaluar las alteraciones que a raíz de su incursión en el grupo al margen de la ley.

Frente a ello se pudo concluir que los niños que padecieron el flagelo del reclutamiento forzado, presentan mayores afectaciones en cuanto a su salud, en procesos asociados al afecto (son los que tienen mayor problema para relacionarse con sus padres, amigos y la comunidad), en procesos emocionales y en el tema de juicios morales conservan un imaginario que no les permite considerarse como víctimas objeto de reparación integral (Finard, 2016).

Los impactos que el reclutamiento forzado deja en los niños, genera una vulneración múltiple a sus Derechos Humanos, materializada en afectaciones físicas, psicológicas, emocionales y sociales que en un alto grado parecerían irreparables, pues el transcurso del tiempo que permanecen en las filas de los grupos armados ha interrumpido su desarrollo como niño y adolescente, los ha dejado sin la posibilidad de alentar un proyecto de vida que debió ser cuidado por el Estado para que se ejecute en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece.

Los daños se generan también posterior a su desvinculación del grupo armado al que pertenecían, pues fuera de la milicia la muerte empieza a ser concebida ya no como una

posibilidad del día a día bajo el fuego cruzado, sino como una consecuencia de los peligros a los que ahora se enfrentan, el perder el imaginario de protección que les generaba pertenecer a un grupo al margen de la ley les causa zozobra, ansiedad, miedo frente a lo difícil que puede ser reincorporarse a una vida en sociedad por la estigmatización y persecución a la que pueden llegar a ser objeto (Díaz, 2010).

Otro aspecto que se refleja posterior a la desmovilización es la dificultad para interactuar y desenvolverse socialmente pues el daño se materializa a partir de la incapacidad del NNA para establecer vínculos con personas que no pertenecen a su núcleo familiar, por lo que ello los aísla para evitar que sean etiquetados y culpados de diversos hechos que se ocasionaron en medio del conflicto interno armado del que eran militantes.

El análisis de los daños que genera el reclutamiento forzado permite entender que existe un elemento diferencial entre los daños que se causaron tanto en niñas como en niños, pues las niñas están sometidas a eventos como los maltratos físicos, los actos sexuales, violaciones individuales y colectivas por parte de los miembros del grupo al margen de la Ley.

Aunado a ello, el no uso de métodos anticonceptivos y posterior transmisión de enfermedades o embarazo, el sometimiento a la práctica de abortos, y la esclavitud en labores como (preparación de alimentos, arreglo de prendas de vestir, organización entre otras), que atentan contra las niñas por su condición de ser mujer, por ser botín de guerra, o por el hecho de estar inmersas en un régimen machista que al interior de la guerra considera a la mujer como un objeto sexual.

No obstante los, niños también son objeto de violación, esclavitud y maltrato físico, con ocasión al reclutamiento forzado, pero son las niñas quienes en mayor medida padecen este tipo de daños que han sido asociados a una posición de dominación y sumisión entre hombres y mujeres, por lo que los daños deberán analizarse con el enfoque diferencial, elemento que será indispensable al momento de efectuar la reparación integral (Díaz, 2010)

En este orden de ideas, existen otros daños que se han agrupado en tres ejes fundamentalmente, el primero, hace expresa referencia al entorno familiar y de comunidad, el cual abarca la posibilidad de afectación por amenaza directa o de otro de los miembros de su núcleo familiar como en el caso en que se reclutan dos menores miembros de la misma familia; el segundo, a la exclusión social que se materializa en la marginalidad y pobreza; de la que es necesario extraer al menor, pues en la reparación integral no bastaría con devolver al NNA a la situación a la que se encontraba antes del reclutamiento, sino mejorarle las condiciones en las que vivía para evitar la exclusión, pobreza y marginalidad.

Por eso, se requiere de la aplicación de un enfoque más sistémico y holístico en el que el objetivo principal corresponda a la protección integral de los NNA lo que permite realizar un análisis real de los riesgos exhaustivos en el que se deben incluir todos los factores que generan vulnerabilidad y a partir de ello adelantar una acción preventiva que debe adelantar el Estado para generar un entorno seguro para que las condiciones de reinserción exitosa y duradera no se vean amenazadas (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2008).

El tercer eje corresponde a la vulneración asociada a los atributos que con ocasión a una cultura en el que la fuerza, el poder, el uso de las armas y las condiciones de estabilidad económica y seguridad, generan escenarios para atraer a los NNA a la pertenencia a los grupos al

margen de la ley, constituyéndose en factores determinantes para que se produzca el reclutamiento forzado (Castellanos, 2013, p. 26).

En conclusión, ante la existencia de un conflicto armado interno, el Estado debe garantizar la aplicación de las normas y principios del DIH, el Estado debe garantizar el respeto de las reglas básicas de humanidad como el principio de distinción previsto en instrumentos de Derecho Internacional Humanitario, que implica que debe distinguirse entre los combatientes y la población civil del conflicto armado a fin de liberar a estos últimos de las situaciones que los afecten y causen daños en su integridad física, como ocurre con el reclutamiento forzado.

De no hacerlo, y frente a un acervo probatorio que demuestre tal omisión ante un juez, podría estarse ante una posible imputación de un daño antijurídico en el régimen de responsabilidad subjetiva materializada en una falla en el servicio, lo cual dará lugar a la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados mediante las diferentes medidas que consagra la reparación integral dispuesta en la ley 1448 de 2011.

La teoría de la falla en el servicio como Título de Imputación de Responsabilidad

Extracontractual del Estado por Violaciones a los Derechos Humanos

Es necesario como antecedente mencionar la sentencia del Consejo de Estado sección tercera de fecha 19 de abril de 2012 expediente 21.515 la cual unificó el concepto de responsabilidad en lo que hace referencia al derecho de daños, y por ende, se argumentó que el modelo de responsabilidad estatal que la Constitución del año 1991 introdujo, no privilegió ningún régimen en especial, sino que dejó como tarea del juez definir frente a las características de cada caso en concreto la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar (Consejo de Estado, sentencia 00005, 2018)

Ahora bien, el título de imputación de responsabilidad de mayor relevancia dentro del ordenamiento jurídico de Colombia ha sido denominado la falla en el servicio, en cuanto en este se desarrollan los principios que fundamentan la razón de ser del Estado administrador y genera elementos que garantizan la no trasgresión de los derechos fundamentales, por ende, principios como la legalidad y buen servicio público se ven analizados al interior de la actuación de la administración (Guecha, 2011, p.95)

Corresponde a un régimen de responsabilidad subjetiva, en el que predomina la culpa de la administración por la extralimitación de las funciones, por la demora, ejecución tardía, defectuosa de las obligaciones o por el incumplimiento de aquellas que se encuentran a cargo del Estado. Por consiguiente, se trata de acciones u omisiones que se predicen de la administración y que en su actuar resultan en cualquiera de aquellas irregularidades que generan daños imputables

al Estado, con la necesidad de ser analizadas de acuerdo a las circunstancias de cada caso y determinar la reparación de los perjuicios ocasionados.

La falla en el servicio refiere unas características que la doctrina y jurisprudencia han desarrollado para su eventual configuración, esto es que desde el punto de vista factico exista una conducta humana, en segundo lugar que se derive de una prestación anormal o deficiente de un servicio público, es decir que no se prestó en la forma indicada o como en condiciones de normalidad se espera que lo preste (Patiño, 2011). Cabe resaltar que la falla en el servicio corresponde a una teoría particular de la teoría del servicio público de las condiciones en que este debe prestarse y las consecuencias derivadas del mal proceder.

Los referentes de la doctrina como Henao (2007) que han realizado un papel importante en la clarificación de la falla en el servicio como título de imputación de responsabilidad extracontractual han argumentado que para que exista una lesión resarcible se requiere que el detrimento que ocasiona sea antijurídico, que no se deriva de que la conducta del autor sea contraria a derecho , sino porque la persona en que recae esta lesión no tiene el deber jurídico de soportarlo, un análisis acucioso en cabeza del juez quien tendrá en algunos casos que analizar cuando la prestación del servicio sea normal o anormal y si la persona tiene el deber de soportarlo a fin de constituir el resarcimiento de los perjuicios.

En torno a estos argumentos el profesor Garcia de Enterria, manifiesta que la postura que el Consejo de Estado Colombiano ha incorporado a su jurisprudencia de la falla en el servicio se convierte en un dato necesario para que prospere la acción de responsabilidad del Estado, sin embargo su consagración dependerá en cada caso del análisis del hecho omisivo, sin que medie la

culpa , ya que la norma desplaza el problema de la antijuridicidad de la acción u omisión del servidor público y lo radica en la antijuridicidad del daño (Henao, 1996)

La sección tercera del Consejo de Estado, ha sido la encargada en numerosas oportunidades de declarar la responsabilidad de la administración por graves violaciones a los Derechos Humanos como el desplazamiento forzado, la tortura, la desaparición forzada, casos para los cuales se ha utilizado el título de imputación de la falla en el servicio, por la acción u omisión de las obligaciones a cargo del Estado.

En todo caso menciona la sala de lo contencioso administrativa sección tercera expediente 14.170, sentencia del 25 de febrero de 2005, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, al referirse a las modalidades de la falla del servicio que:

La existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de responsabilidad de imputación de responsabilidad, entre ellos el de la tradicional falla del servicio, dentro de la cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio (Consejo de Estado, Expediente No. 14.170, 2005)

En los casos en que la falla en el servicio se presenta por la omisión de la administración, se predica de la ausencia de acciones por parte de las entidades del Estado en el cumplimiento de las funciones que le ha atribuido la Constitución Nacional y la Ley generando detrimento de los asociados; y por consiguiente daños por la negligencia injustificada, cuando esa omisión se representa en la prestación de un servicio, resultan daños por negligencia injustificada (Ruiz, 2013, p. 3).

Lo cual distingue omisión de la administración en dos grupos, las omisiones laxas, las cuales hacen referencia a la negligencia o al olvido en los deberes de cuidado, y las omisiones en sentido estricto, que corresponden al incumplimiento de un deber legal que anteriormente se ha consagrado y que se ha atribuido con responsabilidad al Estado, pues de no hacerlo genera un resultado dañoso.

La responsabilidad por falla en el servicio derivada de la omisión de la administración en consideración a un típico evento en donde se requiere la acción de los servicios de seguridad que garantiza el Estado y que de forma injustificada se deja de prestar en un evento determinado para el cual ha dicho la sala de lo contencioso administrativo en reiteradas sentencias del Consejero ponente Jaime Orlando Santofimio, que la obligación de seguridad que atiende al Estado debe ser determinada en consideración a su capacidad real de prestar ese servicio, bajo el entendido que nadie está obligado a lo imposible (Consejo de Estado, Expediente No. 03842, 2017)

Concepto que se precisó por esta corporación en consideración a que la falla en el servicio no debía referirse a una norma abstracta sino que debía preguntarse por lo que en ese caso debía esperarse del servicio de seguridad, teniendo presente las condiciones en que debía ejecutarse la

misión encomendada, el lugar de la ocurrencia, los recursos humanos y materiales con los que podían contar, de tal modo que se configura la falla en el servicio cuando el servicio se presta por debajo de esas condiciones medias, sin que este criterio sea pretexto para justificar el incumplimiento de la administración en su deber de garantizar la vida e integridad de los ciudadanos.

Por su parte, la falla probada, dentro del régimen subjetivo de responsabilidad por falla en el servicio, se constituye en el título de imputación de responsabilidad por excelencia, en el que deben demostrarse por parte del interesado los elementos que la configuran, es decir la falla o la falta de la administración, el daño ocasionado y el nexo causal entre estos dos, por cuanto se hace necesario señalar la irregularidad que se presenta y que constituye la culpabilidad de la administración que pone en entredicho la prestación de un buen servicio en torno a los derechos fundamentales y por el contrario se presenta como un vulnerador de estos (Guecha, 2011).

Así las cosas, y para contextualizar el caso objeto de estudio, cabe indicar que el deber de los organismos de seguridad del Estado en lo que respecta exclusivamente a brindar la protección a los habitantes del territorio nacional de Colombia implica el realizar una serie de actividades para las que se les ha entrenado cautelosamente, además, requiere un esfuerzo mancomunado que dé como resultado el que la población civil en especial niños, niñas y adolescentes sean aislados de toda forma de represión, crimen de guerra, estrategia de dominación o actividad que genere la vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión a un conflicto armado.

El fundamento normativo de la legislación interna para lo antes señalado está contemplado en la Ley 1098 de 2006 Código de infancia y adolescencia, en el Título II garantías de derechos y prevención y el Capítulo I que consagra las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, en especial las que debe adelantar el Estado en apoyo con la sociedad para evitar la amenaza a los derechos fundamentales, asistir y proteger a los NNA para garantizar su desarrollo armónico e integral, lo cual desarrolla el mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución Nacional, y el principio de corresponsabilidad dispuesto desde el año 1969 en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Collazos & Sacristán, 2015).

A su vez, como propósito del Gobierno Nacional para garantizar los derechos de las personas que se encuentran en situación de riesgo, en especial en medio de los eventos que surgen con ocasión al conflicto armado, en el año 2011 se creó la Unidad Nacional de Protección (en adelante “UNP”), como entidad encargada de las funciones de protección que se le habían asignado al Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante “el DAS”); se establecieron una serie de recomendaciones dirigidas a mantener a la población civil alejada del conflicto armado, situación que no ha sucedido, por cuanto desde la fecha se han perpetrado acciones en las que se han visto vulnerados los derechos de los civiles, entre estos NNA que han sido objeto de reclutamiento forzado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 8 de febrero, 2013).

Es de precisar, que la UNP es la entidad a la cual se ha investido de la obligación de garantizar protección a las personas en riesgo, por consiguiente, su falta de proceder, su proceder tardío o mal proceder ha generado que se agudicen las condiciones en las que el accionar de los grupos al margen de la ley se presenta sin mayor obstáculo, poniendo en peligro a las personas y

dando lugar a la responsabilidad a cargo del Estado (Corte Constitucional, Sentencia T- 388, 2013)

El Consejo de Estado ha reiterado que en los casos en los que se estudia la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños, por la omisión atribuible a una autoridad pública en cumplimiento de sus funciones, el título de imputación aplicable es la falla en el servicio, es decir, que para determinar que los perjuicios reclamados son imputables al incumplimiento de una obligación determinada se requiere que:

(...) i) existía la obligación y que la misma no fue cumplida satisfactoriamente y ii) que la omisión fue la causa del daño, es decir, que de no haberse incurrido en la omisión de cumplimiento de N Estado que cuando el daño sufrido deviene de una actividad peligrosa que es ejercida directamente por la propia víctima el régimen de responsabilidad que se imputa al Estado es la falla probada del servicio, y en este sentido deberá responder por los hechos causantes de daño conforme a las obligaciones que a este atiende en cada caso en concreto (Consejo de Estado, Radicación No. 32912, 2015)

Cada una de las irregularidades que se presentan y en las que el Estado por medio de sus funcionarios debe actuar oportunamente para salvaguardar los derechos de sus asociados deben analizarse de acuerdo a cada caso concreto, por ende, frente a los hechos que se perpetran en medio del conflicto armado interno y en los que se ocasionan daños a los NNA, la teoría de responsabilidad que establece un sistema de imputación de responsabilidad civil extracontractual del Estado por la ocurrencia de una falla en el servicio. Es así que, la falla en el servicio frente al reclutamiento forzado se traduce en la omisión de la administración en el cumplimiento de sus funciones legalmente encomendadas y en detrimento de los derechos de los asociados cuando se

presenta una falta en la prestación de un servicio, sin embargo, no existe jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se determine la obligación a cargo del Estado de reparar a un NNA víctima de este flagelo.

Elementos que sirven para establecer la Responsabilidad Extracontractual del Estado por Reclutamiento Forzado de los NNA

La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado viene a reflejar la superación de la idea de la irresponsabilidad de la administración pública, pues se parte de la concepción de un Estado social de Derecho donde la obligación del Estado no se agota con la consagración de los derechos en la Carta Constitucional sino que implica el reconocimiento y la puesta en marcha de medidas capaces de proteger las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico interno y aquellas que sin estar consagradas devienen del bloque constitucional y se dirigen a la lograr un verdadero garantismo (Consejo de Estado, Radicación, 03381, 2017).

De lo anterior que la responsabilidad extracontractual del Estado en el moderno derecho administrativo refiere la importancia a la visión y estudio de la víctima desde su reconocimiento mismo como sujetos de derechos atendiendo a la tutela de la dignidad humana, los derechos constitucionales y los derechos humanos, su fundamento encuentra asidero en la interpretación sistemática de los artículos constitucionales a partir del preámbulo y los artículos 1º, 2º, 4º, 13 a 29, 90, 93 y 229 de la Carta Política y en ejercicio de convencionalidad de las normas incorporadas al ordenamiento jurídico mediante leyes o que su aplicación atendiendo a su carácter de “ius cogens”.

En este orden de ideas, el preámbulo de la constitución política de Colombia indica los principios y los fines que orientan al Estado en cuya realización se dirige con la fuerza de un mandato vinculante hacia la protección de los Derechos Humanos eliminando toda forma de trasgresión, y por tanto, ninguna norma de índole legislativo u otra puede quebrantar las bases allí consignadas y no indemnizarlas (Ferrajoli, 2006)

Por ende, desde el preámbulo constitucional se limita el ejercicio del poder por la soberanía popular, una relación directa con la premisa que plantea la relación en la cual el Estado debe responder por cada uno de los daños que cause a sus administrados, si se considera que el poder que ejerce no es absoluto y que además se debe plantear bajo el entendido que el Estado comete errores y por consiguiente su actuar debe orientarse a garantizar materialmente los derechos.

No obstante, un examen más detallado de los preceptos del preámbulo y del artículo 1 de la Constitución Nacional comprende la existencia de un modelo normativo de derecho que asegura la protección de los derechos humanos frente al poder, estableciendo los límites y regulando el ejercicio de la administración pública, si bien, este argumento se ubica en una de las tres acepciones del modelo garantista que presumen la existencia de un tercer modelo de Estado de derecho que sea capaz de superar las insuficiencias para satisfacer las desigualdades sociales y económicas (Ferrajoli, 2005).

Lo anterior, dispone la necesidad de refundar el modelo de Estado sobre la base de los principios, superando la tradición de la primacía de lo político sobre lo jurídico sometiendo a los vínculos que genera las disposiciones constitucionales, pues más allá de la legitimación formal también se deben satisfacer los criterios que exigen la garantía de los derechos

fundamentales, de ser posible en un plano axiológico en donde existen valores que según Ferrajoli (2005), corresponden a 1) La igualdad jurídica; 2) El nexo entre derechos fundamentales y democracia; 3) El nexo entre derechos fundamentales y paz, y 4) Finalmente, el papel de los derechos fundamentales como la ley del más débil.

El desarrollo de los valores que el modelo garantista de Ferrajoli incorpora, destaca la importancia de la semántica jurídica y de ahí, que sea posible definir la categoría de derechos fundamentales desde una visión de universalidad en los siguientes términos:

(...) todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status personas o ciudadanos, con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestación) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista así mismo por una norma jurídica positiva como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas (Ferrajoli, 2001)

La definición deviene de la idea que el autor desarrolla en torno a la relación estrecha existente entre los derechos fundamentales y la paz, ya que este último escenario posible es el medio para asegurar la vida y la supervivencia, supone un ordenamiento jurídico basado en una democracia protectora de los derechos y las libertades que sea capaz de enfrentar los graves peligros que aquejan a la humanidad como la guerra, posicionando los beneficios que para una nación trae un contexto exento de condiciones de riesgo y vulneración latente de derechos (Moreno, 2007).

La teoría del garantismo permite comprender que los derechos fundamentales son criterios hermenéuticos diferentes de las demás normas, por ende, representan un papel importante en torno a la validez jurídica (al deber ser interno) y además a la vigencia de las normas en el Estado constitucional (el ser), en efecto, estos derechos se materializan como principios que orientan el ordenamiento jurídico y fungen como garantías irrenunciables, lo que implica el carácter vinculante de los bienes o valores estipulados en el pacto entre el Estado y sus coasociados (Torres, 2016)

En efecto, la función de la garantía expresada, como límites al poder, permite visualizar el posicionamiento que en un Estado de Derecho tiene la persona, y las obligaciones que de ello derivan a cargo del Estado a fin de lograr la concreción de un conjunto de bienes e intereses que responden a la dignidad humana, la libertad y la igualdad, como principios constitucionales inalienables, imprescriptibles e individuales (Ferrajoli, 2009)

En este orden de ideas, y en tratándose de la protección a los intereses señalados el artículo 2 de la Constitución Nacional dispone que las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas en sus derechos y libertades, lo cual dispone una introducción a las obligaciones que como se ha argumentado están en cabeza del Estado como fines esenciales, presupuestando así la responsabilidad de la administración que atiende cuando no se dé cumplimiento estricto a las garantías de los ciudadanos.

De lo anterior, y en camino a consolidar la responsabilidad extracontractual del Estado en los términos del Consejo de Estado, se erige el principio pro persona, denominado por la

jurisprudencia de la Corte Constitucional y por la doctrina como el principio de interpretación “pro homine”, frente al que esta corporación se ha referido así:

“El principio de interpretación <pro homine>, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional (Corte Constitucional, Sentencia C-438, 2013)

Éste es entonces un criterio de interpretación que se fundamenta en las obligaciones contenidas en los artículos 1° y 2° de la Constitución antes citados y en el artículo 93, según el cual los derechos y deberes contenidos en la Constitución se deben interpretar de conformidad con los tratados sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia. En lo que tiene que ver con los derechos, los mencionados criterios hermenéuticos se estipulan en el artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Adicionalmente, se debe afirmar que estos criterios configuran parámetro de constitucionalidad, pues impiden que de una norma se desprendan interpretaciones restrictivas de los derechos fundamentales. El principio pro persona, impone que “sin excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental” (Corte Constitucional, Sentencia C-438, 2013) El principio pro homine es otro de los presupuestos sobre los que se fundamenta el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, en el sentido que otorga

sentido a los derechos humanos no solo en su contenido sino en la posibilidad de exigibilidad a nivel nacional e internacional, en una interpretación extensiva de los derechos y de las disposiciones relevantes que de forma armoniosa evolutiva y consensual se han dispuesto en torno a su eficacia y garantía.

Por tal motivo, la jurisprudencia de la Corte interamericana de (Derechos Humanos Corte IDH) ha realizado un análisis acucioso de tal principio atendiendo a la importancia que para el desarrollo de las obligaciones estatales trae en especial para aquellos temas que refieren la garantía de los derechos inherentes a sus coasociados, en todo caso, esa interpretación exhaustiva dice esta corporación corresponde por ejemplo a:

(...) afirmar la titularidad y exigibilidad de un derecho a personas que se sitúan en condiciones especiales, no explícitamente contempladas en la disposición normativa; (ii) adecuar las condiciones del ejercicio del derecho a la realidad fáctica o a los contextos sociales, políticos o económicos determinados, así como (iii) reconocer posiciones, bienes o servicios que no están explícitamente enunciados en un artículo convencional, como parte del contenido de un derecho (Corte Interamericana de Derechos Humanos Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, 2012)

En este orden de ideas, la Corte IDH, manifiesta que la interpretación de los Derechos Humanos debe considerar criterios que permitan entender el alcance que en un ordenamiento jurídico como el de Colombia dispone, en especial en torno a las obligaciones que el Estado asume erga omnes de respeto y de garantías en eventos como el conflicto interno armado, visto este como un escenario de riesgo y vulneración de las garantías fundamentales.

Las anteriores premisas permiten ubicar la relación existente entre el principio pro homine a partir de la interpretación de los derechos humanos más allá de los presupuestos convencionales y la atribución de responsabilidad extracontractual del Estado, por cuanto esta última responde al incumplimiento de los deberes y las obligaciones que tienen como fundamento la primacía de los derechos inherentes a la persona en el ejercicio de las atribuciones que se ha otorgado a los agentes del Estado.

Es decir, la responsabilidad extracontractual del Estado en estos términos no solo se deriva de la vulneración de derechos sino de la falta de adopción de medidas prioritarias positivas de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición especial o por encontrarse en una situación específica que amerite la puesta en marcha de los deberes de prevención, protección, investigación, sanción y reparación de las violaciones (Comité de Derechos Humanos. Comunicación No. 195/1985, 1990).

Así las cosas, los mandatos convencionales y constitucionales que recaen en el Estado derivados de la interpretación del principio pro homine y en relación con los derechos a la vida, la integridad personal, y la libertad, imponen una serie de obligaciones que van más allá de su interpretación exegética, es decir, que establecen un escenario de aseguramiento fáctico donde las conductas que el Estado realice por intermedio de sus agentes deben traducirse en la realidad y eficacia de un compromiso de protección de los Derechos Humanos.

En este sentido, se presenta la protección y garantía de los Derechos Humanos por parte del Estado, sus instituciones y servidores públicos, por consiguiente se dota de una naturaleza de derechos naturales, que son poseídos por el hombre en razón de su esencia, conforme a un

elemento intrínseco como lo es la libertad, que se auto determina a obrar, derechos inalienables anteriores y superiores a la humanidad, y se distinguen de aquellos que han surgido a partir del desarrollo histórico de la sociedad.

Lo cual permite ubicarlos en una categoría superior, que implica que nadie puede apropiarse de ellos sino por la fuerza y la violencia lesionando a la persona como titular de estos, lo cual configura un daño y posterior responsabilidad de aquel que rompa la dinámica garantista sobre la que se ha consagrado el ordenamiento jurídico colombiano.

Sobre la base de esta premisa, es posible ubicar teorías en torno a la fundamentación de los Derechos Humanos que conjugan la raíz ética con la vocación jurídica, y que desde una dimensión irrenunciable implican el desarrollo de exigencias desde “el deber ser”, de lo que se constituye como ideal, y que ubican como responsable de tal obligación al Estado como garante de todo un marco normativo que fundamenta su actuar en la dignidad humana (Olivares, 2018)

Una de estas teorías es la iustnaturalista desde una visión que permite otorgarle incidencia en el ordenamiento jurídico colombiano en relación no solo con los derechos fundamentales sino con las fuentes de derecho, en la cual se reconoce la conexión existente entre los derechos fundamentales y el iusnaturalismo, para determinar la vital importancia que refiere la naturaleza jurídica de estos en función de la protección por parte del Estado (Corte Constitucional, sentencia T 406,1992)

En este orden de ideas, se fundamenta la relación existente en los términos que la Corte Constitucional expone en la referida sentencia así:

(...) existe un ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en las que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas. El concepto de “contenido esencial” es una manifestación del *iusnaturalismo* racionalista del siglo XVIII, según el cual, existe un catálogo de derechos anteriores al derecho positivo, que puede ser establecido racionalmente y sobre el cual existe claridad en cuanto a su delimitación conceptual, su titularidad y el tipo de deberes y obligaciones que de él se derivan (Rodríguez, 2019, p. 3)

En este sentido, la materialización de un Estado moderno como el de Colombia regido por un universo normativo que consolida la creación de una Constitución que positiva de manera definitiva los valores éticos superiores, permite identificar la influencia del *iusnaturalismo* en los Derechos Humanos que han sido positivizados como derechos de los ciudadanos, filosofía que complementa la idea de:

(...) La existencia de un “razonamiento problemático”, es decir, demostrada la ineptitud del sistema al alejarse de las realidades sociales basado en un modelo de derecho que, bajo el pretexto de seguridad jurídica, se planteaba inmutable, universal y objetivo, el derecho natural re surge como una alternativa de “axiomatizar el derecho” (Rodríguez, 2019)

En desarrollo de la teoría del *iusnaturalismo* y avocada la relación existente con el contenido esencial de los Derechos Humanos, el Consejo de Estado orienta sus argumentos a la necesidad de encarnar un tipo de derecho capaz de dar solución a las problemáticas que se

presentan en la fenomenología jurídica colombiana que surja a pesar de todos los inconvenientes que se presentan en los órganos legislativos, y de no ser posible encontrar una solución que se ajuste a los presupuestos legales, se abre la posibilidad a acudir a los principios naturales del derecho los que han sido creados anteriores al mismo Estado y que se han reconocido al hombre por su condición misma de ser hombre racional.

Lo anterior, permite la aplicación de los principios interpretativos de conservación del derecho que ha implementado la jurisprudencia del Consejo de Estado y el efecto útil del mismo, que ha dispuesto en el enfoque de la responsabilidad el eje central es el concepto de daño antijurídico frente al que esta corporación ha dispuesto que:

(...) el artículo 90 de la Constitución consagra (i) la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, (ii) en forma de mandato imperativo, (iii) que es aplicable a todas las autoridades estatales y (iv) a los diversos ámbitos de la responsabilidad (contractual o extracontractual, entre otras). Así mismo, de tal artículo se desprende (v) una garantía para los administrados, que está estrechamente relacionada con el derecho de acceso a la administración de justicia y (vi) una obligación para el Estado de repetir contra sus agentes, cuando la administración pública haya resultado condenada y se demuestre la culpa grave o el dolo del mismo (Corte Constitucional, C-286, 2017).

Por ende, debe quedar claro que el daño antijurídico es un concepto constante que argumenta la jurisprudencia del Consejo de Estado como criterio para definir la adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos.

El Estado debe estar en la capacidad de garantizar la integridad de los Derechos Humanos, de adaptarse a los alcances de los riesgos, de las amenazas inminentes y alejarlos pues puede implicar la asunción de una situación gravosa y con ello un daño antijurídico que constituya responsabilidad extracontractual del Estado (Consejo De Estado, sentencia 2005-02813,2016)

Ahora bien, el Consejo de Estado además de los presupuestos teóricos señalados anteriormente y ante la inexistencia de un fallo en el que se determine la responsabilidad del Estado por el reclutamiento forzado, por ende, esta corporación ha acudido a las disposiciones incorporadas al ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad que se han encargado de establecer los elementos que configuran la responsabilidad del Estado por los hechos que en torno al conflicto armado se presentan y que son consistentes en cada uno de los hechos victimizantes que se presentan.

Es preciso mencionar que en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra de 1949 y el artículo 1 del protocolo adicional II, se encargan de definir el conflicto armado y para ello mencionan que los conflictos no internacionales que se presenten al interior de una de las Altas partes contratantes, puede tratarse de un conflicto en el que participen uno o más grupos armados no gubernamentales, y además que deben alcanzar un umbral de enfrentamiento, que corresponde a excluir algunos disturbios y tensiones interiores.

Un ejemplo de ello sería cuando el gobierno debe acudir a las fuerzas militares en contra de los insurrectos, y por otra parte, para que se considere un conflicto armado no internacional, los participantes deben ser considerados partes en el conflicto, es decir que estén sometidas a una línea de mando y tener la capacidad de mantener operaciones de tipo militar (CICR, 2008)

Por ende, la imputación de responsabilidad en los eventos de muerte o lesiones a la población civil al interior de dicho conflicto armado debe analizarse desde dos perspectivas, desde la producción del daño antijurídico durante el operativo militar, la toma armada o enfrentamiento, y desde la omisión en los deberes de protección, seguridad y otros referentes a la garantía de los derechos fundamentales en los que haya incurrido la fuerza pública, lo cual se traduce en la vulneración de los Derechos Humanos objeto de protección constitucional (Consejo de Estado, expediente (33976), 2017).

En este orden de ideas, el Consejo de Estado ha sido enfático en reiterar que tratándose de situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno, el Estado debe orientar su acción no solo a cumplir los mandatos que se han dispuesto en la Constitución nacional y la ley sino lo preceptuado en el Protocolo II a los Convenios de Ginebra, pues se convierten en obligaciones ineludibles frente a las que una omisión puede desencadenar daños antijurídicos que deben ser reparados por el Estado. Dichos mandatos señalan:

(...) como garantía fundamental se establece que todas “las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor (...) Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable (Protocolo II relativo a los convenios de Ginebra, 1977)

Los primeros desarrollos jurisprudenciales en cuanto al reconocimiento de las víctimas y la transición hacia un Estado justo, equitativo y en paz se consagró en la sentencia C-228 del año 2002⁴. En dicha decisión se hizo extensión de los derechos de las víctimas a un nivel más amplio

⁴ El objeto principal de la sentencia C-228 de 2002 corresponde a la protección de los derechos de las víctimas por ello en la sentencia se examina en primer lugar el alcance de los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible dentro del

protegidos por la constitución nacional y con componentes integrales que no solo consideraban el elemento económico o indemnización como objeto de la reparación.

Por lo anterior, se dispuso como componentes de la reparación el derecho a la verdad, es decir, la coincidencia entre una verdad real y una verdad procesal, el derecho a que se haga justicia, que no haya impunidad, el derecho a que le sea reparado el daño que se le ha causado a través de una compensación económica como forma tradicional de resarcir a las víctimas de un delito y la garantía de no repetición, elemento este que no solo aplica para la víctima y sus familiares sino que se establece como una garantía social.

Así pues, la necesidad de entender las responsabilidades que surgen en el marco del conflicto armado con respecto a las víctimas, hace posible su comprensión desde la consolidación del modelo social de Estado que incorpora una cláusula constitucional que hace posible superar la idea de la irresponsabilidad de la administración pública y trasladarse al entendimiento de que la primacía de los derechos no se agota con el simple respeto de los bienes e intereses consagrados en la Carta Constitucional, sino que además se requiere la implementación de medidas de protección que emanan de las normas internacionales, con lo cual se permite ampliar el ámbito de indagación a cargo del Estado y además la posibilidad de lograr un verdadero garantismo Constitucional (Santofimio, 2014)

Lo anterior permite entender que la responsabilidad que atiende al Estado se gesta en el ejercicio del poder de la administración pública y su deber de procurar por la efectividad de los

proceso penal, a la luz del texto constitucional. Posteriormente, se aludirá la evolución de los derechos de la parte civil en el derecho internacional, como quiera que según lo que establece el artículo 93 de la Carta, los derechos deberán ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. En tercer lugar, con el fin de ilustrar el tratamiento de los derechos de la parte civil en los distintos sistemas jurídicos, se hará una breve referencia a la tendencia en el derecho comprado.

derechos y libertades de los asociados, para ello que en el evento del conflicto armado interno no solo basta con la garantía de los derechos de los ciudadanos sino que además se deben adelantar estrategias y mecanismos para superar los eventos que lo hicieron posible, mediante el cumplimiento de obligaciones positivas de lo contrario se estaría frente a un claro caso de la existencia de un marco normativo pero no a la protección de este. (Naciones Unidas, Derechos Humanos, 2011)

Ahora bien, el cumplimiento de las obligaciones toma especial atención cuando el sujeto a quien debe protegerse es un NNA, pues la Constitución y la jurisprudencia han establecido que se trata de una población que goza de especial atención, sobre la cual se soporta un principio fundamental que condiciona el actuar del Estado a priorizar todas sus acciones en garantía de los derechos fundamentales de los NNA incluso priorizando frente a los derechos de los demás.

La Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, consagra como indispensable proteger a los menores del reclutamiento, de igual forma dispone el compromiso de remitir a los niños y niñas que se desvinculen del conflicto armado interno, al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que sean atendidos sin excepción en su condición de víctimas. (Congreso de la República, Ley 1098, 2006)

La citada norma a su vez clarifica las obligaciones del Estado, quien debe entre otras cosas asegurar que ningún niño colombiano se vea expuesto a formas de explotación económica o la utilización en actividades militares, por ende que se hace necesario, “evaluar el progreso alcanzado, las medidas adoptadas y las dificultades surgidas en relación con el fortalecimiento de

los niños en situaciones de conflicto armado”, todo ello visto desde las tareas que desarrolla el Estado como garante (Unicef, 2015)

En aras de garantizar la protección integral de los menores, los mismos no deberían ser procesados por los ilícitos cometidos con ocasión a su permanencia en los grupos armados al margen de la ley, pues estos ostentan la condición de víctimas; su judicialización procede atendiendo a lo preceptuado en la sentencia C-203 de 2005 en donde se indicó que: “La condición de los menores como víctimas de la guerra, amerita una respuesta enérgica orientada a su protección y tutela y a la sanción de los responsables”; pero de igual forma debe atenderse con cuidado las diversas conductas punibles que los menores desarrollan durante su militancia en los grupos armados ilegales, ya que existen otros derechos involucrados y por ende, no pueden ser desestimados o ignorados por las autoridades (Corte Constitucional, Sentencia C-203, 2005).

La sentencia C- 007 de 2018, hace especial referencia a las medidas adicionales de protección a los NNA víctimas de reclutamiento forzado y conductas afines, como los compromisos y los principios de París 2007, documento en el que la UNICEF hace un detallado relato de los derechos que se ven vulnerados, el impacto y las consecuencias por la participación de NNA en las guerras, y por ello, existe un conjunto de estándares que deben ser tenidos en cuenta por los órganos encargados de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Dentro de dichos estándares se encuentra la obligación de tratar a los NNA menores de 18 años que participaron o fueron utilizados por parte de los grupos al margen de la ley dentro del conflicto como víctimas y por consiguiente a cargo del Estado se encuentra la obligación de

aplicar políticas que conlleven a la reinserción, rehabilitación, cuidado y protección acordes con sus intereses y necesidades.

En consecuencia, el hecho del reclutamiento de NNA, dispone a favor de esta población un catálogo de Derechos, entre los que se encuentra, conocer la verdad, acceder al sistema judicial y obtener una reparación acorde por el hecho victimizante, que ha sido catalogada como uno de los tipos de reparación novedosas que se desprenden del concepto propio de los derechos humanos, reparaciones que pueden ser catalogadas como *in natura* /

Por lo anterior, el Consejo de Estado ha dispuesto que para brindar una verdadera reparación a los NNA reclutados forzosamente se deben adelantar tres condiciones de especial protección: la garantía reforzada de sus derechos, el deber de investigar otros crímenes asociados al reclutamiento de NNA, y la obligación de los operadores jurídicos de considerar el carácter continuo del delito, esto último a fin de realizar un análisis real de los daños ocasionados a la víctima, no en un simple momento, sino durante el tiempo transcurrido hasta que sucedió su desvinculación.

En este orden de ideas se consagra algunos de los argumentos que han sido óbice para decretar la responsabilidad del Estado por los hechos del conflicto interno armado las bases que se gestan en un Estado social de Derecho garante de los derechos individuales y con obligaciones establecidas frente a la protección de los NNA bajo los principios que desarrollan el interés superior del niño y el principio pro infans.

Capítulo III. Reparación Integral

La Reparación Integral conforme a los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha introducido una serie de innovaciones respecto de las instituciones clásicas del derecho internacional público, en temas fundamentales como la responsabilidad, por una parte se encuentra el Estado al que se le ha encomendado la tarea de respetar los derechos y libertades consagrados internacionalmente, y por otro lado los individuos a quien se les ha dotado de la posibilidad de exigir sus derechos, no como una concesión sino como la obligación que atiende al Estado (Nash, 2009).

Asimismo, se introdujo un cambio al objeto de protección del sistema normativo, cambiando la visión de simples intereses recíprocos entre Estados, para pasar al entendimiento de que el objeto de protección son las personas en sus derechos, libertades, bienes e intereses, por ende, la responsabilidad que atiende al Estado no puede verse disminuida ni puede agotarse por la mera voluntad de uno de los sujetos de la obligación.

En este orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resaltado el carácter especial de los tratados modernos sobre derechos humanos mencionando que estos se inspiran en valores superiores, razón por la cual, las actuaciones de los Estados no solo quedan sujetas al ordenamiento interno sino a un control internacional frente al que deben respetar las obligaciones convencionales que han sido discutidas y ratificadas en los diferentes tratados y convenciones en torno a los Derechos Humanos.

Lo anterior establece en cabeza del Estado la obligación de reparar a quienes se constituyan en víctimas de violaciones graves de derechos humanos para lo cual se ha establecido una regla que implica que la reparación plena se realice de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de cada caso, para lo cual deberá incluir restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición(Asamblea general Naciones Unidas, Resolución aprobada el 16 de diciembre de 2005)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto unos criterios básicos sin los cuales no sería posible una reparación integral, sistematizados ampliamente por la doctrina así: La reparación del daño ocasionado implica, siempre que sea posible, la plena restitución, o *restitutio in integrum*, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser posible lo anterior, la Corte puede determinar una serie de disposiciones para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por las infracciones y se establezca, *inter alia*, el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados (Sandoval, 2013).

Seguidamente, la obligación de reparar, que está regulada en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno. Además, la naturaleza y el monto de las reparaciones dependen del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. Por tanto, no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores (López & Acosta, 2006)

En este punto, es importante entrar a conceptualizar con detalle qué debe comportar cada una de las medidas reparadoras, pues en su esencia desarrollan funciones distintas y se materializan cuando se ha dado la aplicación de una verdadera justicia restaurativa de las víctimas a las que se les ha menoscabado sus derechos y a la que ha sido posible resarcir los daños que se les ha causado, para lo cual basta como se ha reiterado volver a la víctima a las condiciones que tenía antes de que se produjera el daño.

El primer componente que contempla la reparación integral es la restitución, con la que se pretende devolver a la víctima a la situación anterior a la vulneración a sus derechos, por lo que a partir de esta se deben adelantar acciones que garanticen regresar a la víctima a su entorno natural con todo el contexto que ello implica, es decir, el ambiente habitual, sus actividades cotidianas, o medidas financieras como la restitución de créditos y pasivos, la restitución de tierras, restitución de capacidades para el empleo, y el proceso de retornos y reubicaciones.

El retorno y reubicación busca contribuir a la estabilización socioeconómica del hogar, la consolidación de su proyecto de vida, la superación de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y la reconstrucción del tejido social de su comunidad a través de tres escenarios de acompañamiento, retorno, reubicación y reintegración social.

Así las cosas, la restitución debe comprender, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de todos los derechos inherentes a la persona, la garantía de una identidad, la posibilidad de una vida familiar, el regreso a su lugar de residencia y trabajo, la devolución de sus bienes y todas las acciones que permitan una vida digna alejada de los hechos que les ocasionaron daños (Guerra, 2016).

De igual manera, la Corte Constitucional incorporó en su jurisprudencia, que la reparación a grandes rasgos es una justicia restaurativa o de carácter reparador, la cual contempla numerosas y diversas formas:

La justicia restaurativa o por algunos llamada reparadora, contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños remedios, indemnizaciones, restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos. En este sentido, existe un consenso entre la jurisprudencia constitucional en línea con los desarrollos del derecho internacional y las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que: 1) el Estado está obligado a dar una compensación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetrados por el Estado; 2) si el gobierno que incurrió en las vulneraciones no compensa el nuevo gobierno está obligado a realizarlas. En todo caso, la reparación también tiene un ingrediente colectivo, pues en los casos de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, la sociedad en su conjunto sufre perjuicios (spill over effects) frente a los cuales se deben adoptar medidas. (Corte Constitucional, Sentencia C-579, 2013)

Otra de las medidas que hacen parte de la reparación integral dispuesta por la Corte IDH es la indemnización, la cual encuentra sus fundamentos en el derecho internacional, una obligación contenida en el artículo 63.1 de la convención Americana de Derechos Humanos, frente a esta medida cabe recalcar que la imposibilidad de garantizarle el goce de su derecho o libertad que fue vulnerado, lo más procedente es el pago de una indemnización justa de las consecuencias de la medida o situación que ha dado lugar a dicha vulneración. (Corte

Interamericana de Derechos Humanos "Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 28 de julio de 1988.)

La indemnización, se ha confundido con la esencia de ser del proceso de reparación integral pues esta es solo una de las medidas que ha de aplicarse, pero en ocasiones ha sido valorada como primordial por el efecto que causa en la víctima, pues esta medida contempla la valoración económica del daño emergente, del lucro cesante, de los perjuicios morales, y en algunos casos del daño ocasionado al proyecto de vida.

En este punto cabe precisar que la reparación integral solo debe operar frente a perjuicios materiales o patrimoniales, pues la misma está directamente relacionada con la apreciación concreta que se puede efectuar de los perjuicios ocasionados al afectado, los cuales pueden traducirse en un equivalente monetario que sea capaz de reflejar la magnitud de las consecuencias dañinas causadas, lo cual refleja la inclinación hacia la reparación de los daños materiales causados los cuales se pueden llegar a indemnizar en la medida de las disminuciones causadas a la víctima, mediante la ejecución de operaciones aritméticas que detallan los efectos nocivos y su tasación, a lo cual se ha determinado como indemnización y se presenta en muchos casos como una reparación *in natura*.

Ahora bien, en los casos en los que es necesaria una valoración de daños no patrimoniales, es decir la reparación de bienes que recaen exclusivamente sobre bienes de la personalidad del afectado para los que no es posible realizar un equitativo monetario producto de una operación matemática, la estimación de su cuantía queda sometida a un juicio subjetivo que realiza el operador judicial, a lo que se ha determinado como un paliativo o compensación por los daños sufridos (Sandoval, 2013)

Entonces, la indemnización en los que es posible o de lo contrario la compensación como presupuesto de la reparación integral que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implica entre otros criterios:

- a) El daño físico o mental, incluido el dolor, el sufrimiento y la angustia.
- b) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante.
- c) El daño a la reputación o a la dignidad.
- d) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicinas y servicios médicos, psicológicos y sociales (Gallón & Reed, 2016)

La Corte IDH ha dispuesto un alcance a la indemnización que consiste en la plena restitución, lo cual es posible con el restablecimiento de la condición anterior y la reparación de cada una de las consecuencias que la infracción produjo, por ende, daría lugar al pago de una indemnización por los daños patrimoniales y extra patrimoniales, incluido el daño moral que se le causo a la víctima, por lo que se procedería a la fijación del monto de la indemnización.

Así las cosas, la Corte IDH ha dispuesto que se requiere revisar aquellos casos en los cuales se trata de una responsabilidad estatal manifiesta e inequívoca y aquellos casos en los que la responsabilidad es inferida, pues en este último caso la indemnización a que habrá lugar será de carácter nominal, para la que se contempla un espacio en el que habrá lugar para el dialogo, “los compromisos cívicos, el mutuo reconocimiento , el respeto, la solución pacífica de controversias, para la que se producirá una resolución que consignará este tipo de indemnización sin que haya lugar al pago de un eventual monto económico”, lo que deja en duda que de esta manera se pueda satisfacer las exigencias del lesionado (Villalta, 2014).

Continuando con los componentes que definen la reparación integral, se ha consignado las medidas de satisfacción y garantías de no repetición, al igual que las antes señaladas, han sido extraídas de los presupuestos internacionales, las cuales implican la reparación de un daño que no es posible tasar en dinero, pues por ser un perjuicio de carácter inmaterial se debe garantizar que los hechos que dieron origen a la afectación de los Derechos Humanos, no se vuelvan a presentar en el futuro. Las medidas de satisfacción, se materializan a través de:

La cesación de las violaciones, la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; la declaración oficial o la decisión judicial de reparación de la dignidad, de la reputación y de otros derechos de las víctimas; la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las responsabilidades; las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas; o la enseñanza y la difusión de la verdad histórica (Asamblea general de las Naciones Unidas, A/RES/60/147)

Las medidas de satisfacción buscan además de proporcionar bienestar contribuyen a mitigar los dolores que se ha causado a las víctimas, a través de mecanismos que garanticen el restablecimiento de su dignidad y el conocimiento y difusión de la verdad sobre lo sucedido, estas medidas hacen parte de las dimensiones individual y colectiva de la reparación, y pretenden resarcir el dolor a través de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas.

La Corte IDH ha desarrollado un sinnúmero de medidas de satisfacción, como el ofrecimiento de disculpas públicas a cada una de las víctimas, difusión a través de las plataformas de internet de disculpas, establecimiento de fechas memorables y días nacionales, cambio de nombres de establecimientos como hospitales, escuelas o calles en honor a las víctimas, entrega

de restos mortales, entre otros, caso específico el de la sentencia de Bámaca Velázquez Vs Guatemala⁵, para la que se dispuso como medida de satisfacción dar sepultura conforme a las creencias y costumbres al señor Bámaca, pues solo de aquella forma se aseguraría no solo el encuentro entre vivos sino con los antepasados maya del fallecido, tal y como lo profesa su cultura.

De igual forma la reparación integral comporta unas medidas de rehabilitación, respecto a estas se puede señalar que en casos en que existan padecimientos por parte de las víctimas o a sus familiares, generalmente esto ocurre cuando existen grandes violaciones a los Derechos Humanos, se deben ordenar las medidas que aminoren este sufrimiento, ya sea, mediante asistencia médica psicológica o psiquiátrica, indicando el tiempo en el cual deben durar los tratamientos, en casos de mayor gravedad indica que los tratamientos deben durar de por vida (Bruno, 2013)

La rehabilitación requiere de un profesional especializado en cada uno de los campos que se requiera rehabilitar en la víctima, para que dichas medidas sean efectivas, al igual que considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada una de las personas víctimas, así pues tal referencia se puede encontrar en lo dispuesto por la CIDH en la sentencia del caso de las dos erres vs Guatemala, se dispuso como rehabilitación el tratamiento médico especializado y en

⁵ El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos, los cuales se enmarcan dentro de la práctica del Ejército de capturar guerrilleros y mantenerlos en reclusión clandestina a efectos de obtener, mediante torturas físicas y psicológicas, información útil. El 12 de marzo de 1992 se produjo un enfrentamiento armado entre combatientes de la guerrilla pertenecientes al Frente Luis Ixmatá y miembros del Ejército en el Municipio de Nuevo San Carlos, Departamento de Retalhuleu. En dicho enfrentamiento fue capturado Efraín Bámaca Velásquez. Los captores trasladaron a Efraín Bámaca Velásquez, quien estaba herido, a un destacamento militar. Durante su reclusión en dicho centro, permaneció atado y con los ojos vendados, y fue sometido a numerosos maltratos durante su interrogatorio. La última vez que fue visto el señor Bámaca Velásquez se encontraba en la enfermería de una base militar atado a una cama de metal.

el caso Baena Ricardo vs Panamá, el análisis del caso permitió establecer como medida de rehabilitación acorde la reintegración de los trabajadores a sus empleos, una medida de tipo social y legal concretamente para reconstruir el contexto anterior al hecho víctimizante y en general en el campo laboral.

Por último y no menos importante está la medida que implica la garantía de no repetición, la cual propende el establecimiento de acciones tendientes a garantizar que no se repita las violaciones a los Derechos Humanos ni las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, las garantías de no repetición en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende de las obligaciones que atiende a los estados de reparar cada uno de los daños causados por la violación de un derecho en medio de un conflicto, por lo cual la Corte IDH ha exhortado a los estados para tomar medidas de fondo que sean efectivas y permitan resolver de fondo las causas del conflicto.

Tal disposición ha sido extraída del análisis de casos de diversas sentencias realizados por la Corte IDH como la del caso Bulacio Vs Argentina en el que la Policía Federal de Argentina realizó una detención masiva de más de ochenta personas. Entre los detenidos se encontraba Walter David Bulacio de 17 años, quién luego de su detención fue trasladado a la comisaria 35 en Buenos Aires en donde fue golpeado por agentes policiales, lo cual se constituye en un acto de violencia que atenta contra los Derechos Humanos a la vida, a la integridad personal, los derechos del niño y las garantías judiciales. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio Vs Argentina)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en dicho fallo, determinó el sentido de la reparación a favor del menor, la cual no debía entenderse como una indemnización pecuniaria de los daños sino que debía orientarse a la realización de justicia, la satisfacción a la víctima (o sus familiares), y la garantía de no repetición de los hechos lesivos, lo cual conlleva a hacer visibles los lazos de solidaridad entre quienes fueron víctimas y quienes pueden llegar a serlo, es decir un pronunciamiento dirigido a la garantía de no repetición de los hechos victimizantes.

El pronunciamiento de diversas sentencias ha permitido que la Corte IDH, amplíe el entendimiento de la garantía de no repetición, por consiguiente, en casos como la masacre de las Dos Erres Vs Guatemala se dispuso la creación de una página web en la que se establezcan herramientas que faciliten la búsqueda de menores sustraídos y retenidos ilegalmente, además de la realización de un acto público en el que el Estado reconozca su responsabilidad internacional por los hechos perpetrados, en relación a sentencias de hechos perpetrados en Colombia como la sentencia del caso de los 19 comerciantes vs Colombia en el que se solicitó por parte de la CIHD que ejecutaran actos de reconocimiento público entendiéndose como una medida de no repetición (Duque & Torres, 2014)

En este orden de ideas cabe recordar que la Corte Constitucional de Colombia, ha resaltado en sentencias como C-579 de 2013 y C-830 del año 2013 que la garantía de no repetición comprende la obligación de adoptar medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos, para ello se establece la necesidad de incorporar mecanismos de reforma institucional, como la adopción de políticas y programas que garanticen la eficacia de los Derechos Humanos, y para ello que se exponga las

garantías de no repetición como un mecanismo de prevención y protección efectiva y eficaz de derechos humanos a nivel institucional y estatal(Corte Constitucional, C-579, 2013).

La reparación en términos de la Corte IDH además de garantizar los derechos conculcados, busca resarcir a las víctimas y a sus familiares, reparar las consecuencias por las infracciones a ellos producidas, pues se les está concediendo un reconocimiento de la importancia de su dignidad y a su vez se está consolidando las obligaciones con ocasión a la comisión de daños en su contra que no tenía la obligación legal de soportar y que se traduce en el deber de adelantar una reparación integral, restaurativa y transformadora (Núñez & Zuluaga, 2013).

La reparación entonces, es una respuesta social y jurídica a los hechos que se consideran ofensivos o lesivos, que goza de prioridad pues es la materialización de los postulados de justicia y equidad que permiten la democracia estable, en otros términos, la reparación permite generar la reconstrucción de la confianza pública, de la institucionalidad democrática.

Aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta todo un catálogo de medidas de reparación integral críticos como el profesor Henao (2015) argumentan que:

(...) las condiciones de injusticia estructural existentes en el Continente podrían dar lugar a un ambicioso programa de transformaciones que no puede ser impulsado por un tribunal internacional. Sin desmerecer la justificación de esta postura y la necesidad de considerar las condiciones estructurales de injusticia, es importante mantener la cautela respecto de qué está en el ámbito estricto de la decisión de un tribunal y qué corresponde a los Estados en la definición de sus políticas socioeconómicas y de inclusión social (p. 42).

Capítulo IV. Caracterización del proceso de Reparación de Niños, Niñas y Adolescentes desvinculados del Conflicto Armado: Colombia

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de víctima de reclutamiento forzado a partir de dos presupuestos, que ocurra un hecho victimizante y que la víctima sea un menor al momento de la ocurrencia del hecho, por lo que la calidad del agente perpetrador no es un elemento que se requiera para configurar la calidad de víctima (Sentencia C-069, 2016)

Por su parte el concepto de víctima ha sido aplicado en el campo de los derechos humanos con una serie de características que hacen parte de cada contexto en que se desarrolla los eventos problemáticos.

(...) La categoría *víctima* , ha alcanzado un lugar preponderante en las políticas públicas contemporáneas de Derechos Humanos (DD. HH.) orientadas a gestionar las consecuencias de conflictos armados internos o terrorismos de Estado. Se puede observar la proliferación de leyes, programas de gobierno e iniciativas conmemorativas, destinados a identificar, reparar y conmemorar a las víctimas. Estas acciones suelen incluir la creación de monumentos y memoriales públicos para recordar a los desaparecidos o asesinados, y de leyes para reparar por vía jurídica o administrativa a los secuestrados, a los familiares de personas detenidas, desaparecidas o a las personas o los grupos que sufrieron el desplazamiento forzado de sus tierras, entre otros. Y también comprenden la implementación de planes para identificar o juzgar a los victimarios (Guglielmucci, 2007)

La ley 1448 de 2011 en el artículo 3 refiere que se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

De acuerdo con lo anterior y para precisar el concepto los NNA reclutados por los grupos armados al margen de la ley se les considera víctimas por diversas razones que han sido incorporadas en los análisis de la jurisprudencia nacional e internacional, así las cosas:

(...) i) El reclutamiento forzado genera una amplia afectación de los derechos humanos de los NNA debido a las situaciones extremas a las que son sometidos. ii) Como se mencionó anteriormente, en esta conducta convergen otras afectaciones a la integridad, dignidad y libertad de estas personas, las cuales se traducen en el daño físico y emocional de los NNA. iii) Los NNA que han sido reclutados ilegalmente, ven seriamente limitada la posibilidad de desarrollarse, personal, familiar y profesionalmente, ya que pierden uno de los derechos humanos más importantes para la persona, como lo es la libertad. iv) El impacto del reclutamiento en la niñez deja secuelas psicológicas que les impide un adecuado desarrollo de la personalidad y su reintegración social (Alarcón, 2019)

Por consiguiente, se debe fundamentar en el razonamiento que aleja la idea de que un NNA desmovilizado del grupo al margen de la ley tenga algún tipo de responsabilidad por su reclutamiento atendiendo a las condiciones subyacentes y “voluntarias” que rodearon su reclutamiento, si bien la Corte Constitucional ha sostenido en este sentido que:

(...) Si bien la mayor parte de niños combatientes en el mundo son reclutados forzosamente, algunos ingresan a los grupos armados bajo la apariencia de un reclutamiento “voluntario”. Sin embargo, es claro para la comunidad internacional y para los expertos en el tema que el calificativo de “voluntario” no se corresponde con la

situación material que lleva a los menores de edad a “decidir” que quieren participar en un grupo armado; en efecto, la opción de un niño de ingresar a estos grupos no es generalmente una decisión libre. La determinación de incorporarse a las filas obedece, en la práctica, a presiones de tipo económico, social, cultural o político, que no dejan alternativa a los niños ni a sus familias (Corte Constitucional, Sentencia C-203, 2005)

El reclutamiento forzado trae consigo una vulneración múltiple de los derechos fundamentales, con consecuencias que afectan la integridad física, emocional y psicológica, de los NNA, daños que no inician al momento de su incorporación a los grupos al margen de la ley sino que se fundan de forma multicausal, en el cual las condiciones previas y que hicieron posible o facilitaron el reclutamiento también deben ser consideradas al momento de evaluar el impacto y proponer una respuesta (Correa, Jimenez, Ladisch & Salazar, 2014)

El reclutamiento como crimen de guerra es una práctica que compromete múltiples violaciones a los derechos humanos. Esto significa que reclutamiento de los niños y las niñas no es un proceso incidental o voluntario. La evidencia es concluyente al señalar que se trata de un crimen colectivo, en el marco de una política explícita de las organizaciones ilegales, orientada a consolidar el pie de fuerza y la mano de obra que les permita mantener el control sobre territorios y recursos estratégicos (Medina, 2009)

Por consiguiente, la realidad del reclutamiento forzado para los NNA que lo han padecido y se han desmovilizado es tenebrosa, el reflejo de los diferentes impactos que reposan en su cuerpo desentrañan una clara necesidad de una reparación sensible, equitativa, capaz de individualizar las realidades, los daños, y las necesidades de los menores elementos

diferenciadores para reconocer los impactos que este flagelo ocasiona, a fin de garantizar un tratamiento segmentado más allá de políticas públicas de reparación generalizadas que no se ejecutan en ocasiones por la falta de provisión de los recursos, infraestructura y personal idóneo para la protección de los menores de edad y la reintegración a la vida en sociedad (Correa, Jiménez, Ladish & Salazar, 2014).

No obstante, Colombia ha desarrollado un marco legislativo encaminado a la desmovilización de los actores armados, a partir de la Ley 418 de 1997 se ha venido regulando un camino largo para realizar los procesos de negociación que más adelante propiciarían la desmovilización de integrantes de los grupos armados ilegales. Dicha ley fue prorrogada por la Ley 548 de 1999 frente a la posibilidad de desarrollar procesos en los que la desmovilización fuese el fin con los diferentes grupos armados.

Por su parte la ley 782 del año 2002, la cual se encargó de incorporar disposiciones generales para los niños, niñas y adolescentes que fueran desvinculados de grupos al margen de la ley, entre ellas que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está en la obligación de diseñar un programa especial de protección para asistir todos los casos de menores de edad que hayan sido parte de las hostilidades del conflicto armado interno, mediante asistencia prioritaria a aquellos que hayan quedado sin familia o cuya familia no ostente la condición para cuidarlos

El artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 dispone que todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento tengan derecho a la reparación integral en los términos que dicha ley dispone. Los NNA víctimas del delito de reclutamiento ilícito podrán reclamar la reparación del daño, de acuerdo con la prescripción del delito consagrada en el artículo 83 del Código Penal.

Dicha ley consagra la obligación de reparar a los menores víctimas de reclutamiento ilícito pero no establece un enfoque diferencial entre aquellos que siendo reclutados como menores de edad se desvinculan siendo mayores y quienes son desvinculados como menores, por cuanto, para la legislación nacional en torno al proceso de reparación integral se establecen dos grandes grupos: los niños, niñas y adolescentes y los mayores de edad sin tener presente el momento desde el que se les reconoce como víctimas.

El 25 de Julio de 2005 se sancionó la Ley 795 o ley de Justicia y paz, reglamentada mediante el Decreto 4760 de 2005, mediante la cual se establece una serie de beneficios para aquellos que se desmovilicen de los grupos al margen de la ley, dicha ley incorpora los aspectos jurídicos para el proceso de desmovilización y reintegración a la vida en sociedad, se produzca la desvinculación de los excombatientes y se proceda a garantizar sus derechos a través de medidas reparación.

A su vez, en la Ley de Justicia y Paz, se regula el proceso de desmovilización, desarticulación y reintegración de los paramilitares, la obligación que tienen los grupos armados organizados al margen de la ley para entregar los menores reclutados, pues no hacerlo tiene como consecuencia la pérdida de los beneficios jurídicos y administrativos que derivan del proceso (Consejo de Estado, concepto 2362, 2018).

Otro de los referentes normativos de los que debe hacerse mención es la Directiva emanada del Ministerio de Defensa del año 2007, que surge con ocasión a la presencia de menores en los procesos de desmovilización, los cuales no pueden ser tomados como simples

combatientes sino como sujetos de reparación, por ello, en dicha directiva se dispuso la necesidad de capacitar a los miembros de la fuerza pública para que conozcan el procedimiento que se debe desarrollar cuando se capturen niños y niñas en medio de los ataques militares o en desmovilizaciones masivas (Ministerio de Defensa Nacional, 2007).

Es necesario recalcar que en Colombia existen tres vías por medio de las cuales se puede efectuar la reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos, la primera corresponde a la vía judicial, a la que se puede acudir en virtud de la vía jurisdiccional penal o contenciosa administrativa y la reparación administrativa a cargo de autoridades administrativas, dirigidas a reconocer integralmente los perjuicios a las víctimas por la trasgresión a los derechos en medio del conflicto armado.

En el caso colombiano corresponde a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y un Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.

La reparación en sede judicial se encuentra fundamentada en el artículo 90 Constitucional, hace énfasis al otorgamiento de justicia a las personas consideradas en forma individual, haciendo especial mención a su caso y por ende, analizando las condiciones en torno a las que se presentó la violación a sus derechos, el estudio de la Corte Constitucional en torno a esta vía de reparación ha sido señalado en múltiples sentencias que desarrollan los derechos fundamentales, criterios unificados en sentencias que extraen conceptos desde el derecho comparado en el entendido de la necesidad de verdad, justicia y reparación integral en cada uno de los procesos que se adelanten.

En este sentido la sentencia SU254/13 ha puesto de relieve que en la reparación que se adelanta ante la jurisdicción penal se presentan las siguientes características:

(...) los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima (Sentencia SU254, 2013)

Por consiguiente, la reparación al interior del proceso penal se caracteriza porque de esta se desprende el incidente de reparación integral, con efecto solo para las víctimas que acuden al proceso penal, en el que se hace necesario demostrar la dimensión y el tipo del hecho victimizante, además de la cuantía, para determinar proporcionalmente el monto de la indemnización, así como las diferentes medidas de reparación integral entre las que se ha dispuesto la rehabilitación, la reparación simbólica, la indemnización y las garantías de no repetición.

La reparación judicial penal, encuentra fundamento en el criterio de restituo in integrum, mediante el cual se pretende reparar a las víctimas en proporción al daño que se les ocasionó, los responsables de la reparación patrimonial son los victimarios y solo en forma subsidiaria en caso de que estos no respondan o lo hagan parcialmente el Estado responderá subsidiariamente, sobre el caso particular la Corte Constitucional ha señalado que(...) el Estado solamente debe responder por sus acciones u omisiones; en oposición ha dicho principio y de manera excepcional y subsidiaria, también responde cuando los recursos de los victimarios resulten insuficientes para pagar a las víctimas, pues no resulta acorde que en los procesos de justicia transicional hacia la paz esta distribución de responsabilidades se modifique. En efecto:

La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo de forma subsidiaria, pues no resulta acorde con los principios de responsabilidad consagrados en la Constitución y la ley: "relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados "(Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil Concepto 2362, 2018)

La reparación en sede judicial consagrada en la Ley 975 de 2005 consiste según lo ha precisado en la Corte constitucional corresponde:

El otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas como víctimas, examinando caso por caso las violaciones en desarrollo del proceso penal, llevado a cabo dentro de la jurisdicción de Justicia y Paz, a través de un incidente de reparación integral de los daños causados, siendo los victimarios los primeros obligados a reparar a las víctimas, subsidiariamente y de manera solidaria el grupo criminal al que pertenezcan los perpetradores del ilícito y, residualmente, el Estado (Sentencia SU254 de 2013).

Sobre el incidente de reparación la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

(...) se trata, entonces, de un mecanismo procesal independiente y posterior al trámite penal propiamente dicho, pues el mismo ya no busca obtener esa declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito -reparación en sentido lato- y cualesquiera otras expresiones encaminadas a obtener la satisfacción de los derechos a la verdad y a la

justicia, todo lo cual está cobijado por la responsabilidad civil, como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional: (...) si bien la indemnización derivada de la lesión de derechos pecuniarios es de suma trascendencia, también lo es aquella que deriva de la lesión de derechos no pecuniarios, la cual también está cobijada por la responsabilidad civil. (Corte Suprema de Justicia, Radicado 34145, 2011).

Entonces la reparación del daño causado se deriva del supuesto que la fuente de obligación se encuentra acreditada por la existencia de una sentencia condenatoria que declara la responsabilidad penal del procesado y faculta a la víctima para adelantar el trámite incidental para que se les satisfaga sus pretensiones indemnizatorias, que encuentra su asidero en la responsabilidad civil producto de la conducta delictiva.

En este sentido la reparación integral de la víctima abarca los derechos que para estas se extraen de la Ley de justicia y paz entre los que se encuentra el derecho a la verdad la justicia y el componente de reparación el cual se deriva de una perspectiva económica que contiene la remuneración de los perjuicios materiales como todo detrimento patrimonial de la víctima y el daño moral que refiere una afectación interna, espiritual o inmaterial, el dolor, el desapego y la tristeza sufrida por la persona que puede ser valorada económicamente.

Otra de las vías para la reparación integral es la judicial (contencioso-administrativa), en la que la asignación de medidas reparatorias a la víctima se realiza a partir de la decisión de una autoridad judicial preestablecida y con competencia para decidir tomando como criterio la legislación nacional, la jurisprudencia y el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que la decisión del juez permitirá el ofrecimiento de un catálogo de prestaciones a la víctima

dentro de las que se encuentra nuevamente señaladas la restitución, la compensación la rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Este tipo de reparación al contrario de ser flexible y expedita conlleva una serie de gastos económicos y de tiempo por cuanto la carga de la prueba corresponde a la víctima quien en su rol debe aportar el material probatorio suficiente que permita comprobar al juez que el Estado tuvo algún tipo de responsabilidad bien por acción o bien por omisión en la acusación de los daños que se aluden en la demanda interpuesta y que por consiguiente se le causo un perjuicio que ha de ser reparado integralmente.

El horizonte natural del procedimiento contencioso administrativo otorga a las reparaciones un fundamento superior en la búsqueda de la satisfacción de las expectativas individuales y sociales, pues sin la existencia de dicho proceso quedarían en firme las consecuencias de la vulneración cometida, se alejaría del espectro la posibilidad de un resarcimiento de los daños causados en las diferentes posibilidades que se han consagrado, salvo en lo relativo a la satisfacción honoraria que deriva de la mera declaración de que el Estado ha violado un derecho del individuo.

Ahora bien, la última vía frente a la que se puede acudir en los procesos de reparación es la administrativa fundamentada en el artículo 2 de la Constitución Nacional, en el que se consagra la posición de garante en cabeza del Estado y frente a sus administrados en relación con la primacía de los derechos fundamentales, este procedimiento administrativo plantea un mecanismo masivo para atender situaciones en las que se han presentado violaciones graves a los

Derechos Humanos, la reparación conlleva la restitución, compensación, indemnización, rehabilitación y medidas de no repetición.

Este mecanismo conlleva un procedimiento expedito, y flexible por medio del cual el Gobierno Nacional autoriza el pago de una indemnización que previamente ha sido tasada sin necesidad de un proceso judicial, sino a través de un trámite meramente administrativo, con la cual se busca satisfacer el deber de reparar y representa un esfuerzo por reconocer a las víctimas y a las circunstancias de su victimización, así como el recobrar la confianza en las instituciones (Mazo & Valencia, 2016)

En relación con las víctimas del conflicto armado Colombiano, dicha reparación ha sido regulada por el Decreto 4800 de 2011, el cual tiene por objeto establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus derechos constitucionales, esto a partir de los diversos enfoques que la reparación integral ha dispuesto, enfoque humanitario, de desarrollo humano y seguridad humana, de derechos, transformador, de daño o la afectación.

El decreto 4800 de 2011 se basa en el principio de solidaridad y establece un tipo de reparación que responde a un principio ético-legal como desarrollo de las obligaciones que el Estado ha adquirido a nivel nacional como internacional otorgando al Estado la obligación de responsabilizarse de todas las actividades tendientes a que las víctimas sean reparadas por cada uno de los perjuicios que se les ocasionó por su acción u omisión, lo cual permite concebir la

reparación como un derecho y no como una ayuda humanitaria, pues deviene de los instrumentos legales creados para proteger a las víctimas.

La expedición del Decreto 1290 de 2008 dio lugar a una norma cuyo propósito declarado es aliviar y reparar el sufrimiento experimentado por los colombianos afectados por la violencia, sin embargo, las medidas de reparación que se han dispuesto no se han ejecutado de manera visible, lo cual ha alejado en incertidumbre las medidas establecidas por el Decreto, sólo ha sido desarrollada, de manera masiva, la indemnización solidaria.

Posterior a ello, la Ley 1448 de 2011 profundizó en el tema de la reparación administrativa y dispuso medidas de asistencia y atención a las víctimas, sin que haya sido efectiva pues no se cuenta con un mecanismo diferenciador que permita entender el contexto particular de cada víctima y la orientación de su reparación, situación que ha dado lugar a manifestar que dicha ley vulnera los principios de igualdad y no discriminación y perjudica los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. (Comisión colombiana de juristas, 2014)

Y respecto a las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición de las conductas delictivas, hay que decir que no se han ejecutado de manera visible, por lo que no parece descabellado afirmar que el tipo de eficacia perseguido con su consagración normativa es el propio de la eficacia enunciativa. Este tipo de eficacia simbólica sirve para crear una representación en la opinión pública, y lógicamente frente a la comunidad internacional.

Ahora bien, cabe resaltar que las tres vías por medio de las cuales se puede efectuar la reparación por las graves violaciones a los Derechos Humanos son coherentes y consistentes en

algunas de las medidas que debe comprender la reparación integral es decir, se hace mención de las medidas resarcitorias a partir del alcance otorgado el cual excede la visión meramente económica, de la participación de las víctimas dentro de los procesos que se adelantan contra los responsables del daño, por ende, debe abarcar cada uno de los daños y perjuicios sufridos por la víctima a nivel individual y comunitario.

En el plano individual de la reparación integral, la Corte ha sostenido que las medidas de reparación se extienden así:

i) la restitutio in integrum, o reposición de la situación a su estado original; ii) la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y iii) la satisfacción o reparación moral'. En el plano comunitario, también las víctimas colectivas de violaciones de sus derechos humanos o de delitos por parte de grupos armados al margen de la ley tienen derecho a una reparación colectiva que exige por parte del Estado la implementación de medidas económicas y simbólicas de satisfacción colectiva, garantías de no repetición, y acciones orientadas a la reconstrucción psicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia (Corte Constitucional, sentencia T-458 de 2010)

Es pertinente describir cada una de las medidas que la reparación integral dispone en la vía administrativa partiendo por las medidas de restitución aquellas que hacen parte de las dimensiones individual y colectiva de la reparación, y que se encaminan principalmente a devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, por consiguiente, comprende el restablecimiento del derecho fundamental a la libertad, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía con ello la imperante necesidad de que se le retorne a su lugar de residencia, a su núcleo familiar, con

condiciones de vida suficientes en tratándose de NNA para que puedan retomar su proyecto de vida.

Las medidas de satisfacción hacen parte de las dimensiones individuales y colectivas en las reparaciones que buscan resarcir el dolor a través de la reconstrucción de la verdad, la difusión de la memoria histórica y la dignificación de las víctimas, en la ruta de reparación individual de los NNA víctimas de reclutamiento forzado las medidas de satisfacción que se presentan son principalmente (i) el mensaje estatal de dignificación o carta de dignificación; (ii) la exención en la prestación del servicio militar y desincorporación; (iii) los procesos de reconocimiento de responsabilidades y solicitudes de perdón público y (iv) el acompañamiento a la entrega de cadáveres de las víctimas de desaparición forzada homicidio, que adelante la Fiscalía General de la Nación.

Esta medida de reparación ha sido ampliamente desarrollada pues comporta un sinnúmero de estrategias que pretender hacer posible reparar el dolor de la víctima, un sentimiento que con dificultad puede ser cuantificado y determinado, lo que dispone implementar el apoyo a las iniciativas municipales en torno a la conmemoración y memoria de las víctimas, la construcción del tejido social y cultural desde un simbolismo social, que permita el perdón público, el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, la aceptación pública de los hechos por parte de los victimarios y la no repetición.

La rehabilitación esta forma de reparación fue definida por el artículo 8.º de la Ley 975 de 2005 como aquella que "consiste en realizar acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y psicológicos como consecuencia del delito", es un mecanismo indispensable para contribuir a una solución duradera de la problemática que originó el hecho

victimizante entonces con esta medida el Estado debe caracterizar el reclutamiento forzado en sus diferentes dimensiones y establecer políticas públicas de prevención y eliminación de los riesgos que hacen posible que se presenten los eventos de reclutamiento forzado uso y utilización de NNA en las hostilidades del conflicto armado.

Por consiguiente, en esta medida se hace necesario la implementación de estrategias de carácter físico, psicológico para las víctimas y además su empoderamiento al interior del proceso de reparación permitiendo la reconstrucción del tejido social, este escenario de reparación comprende a su vez los servicios de salud por intermedio de las entidades prestadoras de servicios de salud todo dirigido al componente emocional que logre que las víctimas se sientan reparadas (Zubiria, 2019)

Otra de las medidas que consagra la reparación integral y que se presenta como un principio general de la responsabilidad internacional del Estado, pues a diferencia de las demás se encuentra dirigida a la sociedad con el fin de eliminar las formas de vulneración de los derechos humanos, superar las causas estructurales que ocasionan riesgos para la población y los posicionan en un ambiente hostil en el que se ve amenazada su vida, libertad e integridad física.

La unidad para la atención y reparación integral de las víctimas dispone que la garantía de no repetición comprenden dos dimensiones: una preventiva y otra reparadora.

La dimensión preventiva surge de la obligación internacional que tienen los Estados de prevenir las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, y cobra especial importancia en procesos transicionales donde el riesgo persiste y no basta con reparar los daños ya infligidos sino prevenir los futuros. Por

ejemplo, el desminado y la prevención de reclutamiento. La dimensión reparadora se refiere a acciones que correspondan a mitigar los daños infringidos a las víctimas en violación a sus derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta acciones de carácter institucional, político, económico y social que beneficien a la sociedad en general (Unidad de Víctimas, 2013).

El principio de no repetición no solo permite alejar del panorama de conflicto a los NNA sino que obliga al Estado a promover una política pública preventiva capaz de mapear los diferentes actores armados, las zonas más propensas a hechos delictivos con ocasión al conflicto armado, las fuentes de vulneración de derechos, los móviles y las problemáticas sociales que ubican a la población en una desventaja socioeconómica, una tarea crucial del Estado para el logro de la paz y el fortalecimiento de la democracia y reconciliación que devuelva la confianza en la institucionalidad a la población en general.

Así las cosas, a partir de la implementación de la justicia transicional en Colombia, en el tema de la reparación las medidas antes señaladas han tenido auge dentro de las posibilidades para reintegrar a la vida en sociedad a todas aquellas personas que de una u otra forma se convirtieron en víctimas al interior del conflicto armado interno, para ello, se han establecido los componentes normativos junto con la designación de un grupo de autoridades competentes con funciones establecidas que deben cumplirse a cabalidad para que la reparación sea una realidad tangible, a partir de la manifestación social que pide a dichas autoridades la demanda eficaz de los derechos

La reparación de las víctimas de reclutamiento forzado debe comportar el análisis del contexto en que se ocasionó el hecho delictivo, pues se requiere considerar cada uno de los elementos que a este obedecieron y que dieron origen a los diversos daños que perduran en el tiempo como:

(...) afectaciones a la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lesionan sus vínculos de amistad, vecindad y convivencia, hay destrucción de sus referentes y expectativas de vida y de sus espacios de formación y socialización, afecta también la estructuración tanto de la identidad y de la vida cotidiana de una sociedad, como de los procesos de aprendizaje social. Esto basado en los relatos de los niños víctimas del conflicto recopilados en el informe de Natalia Springer para la ONU”. (Springer, 2012, p. 66).

La Corte Constitucional entiende que los niños, niñas y adolescentes, ostentan una doble condición al interior de la guerra, la primera de ellas como combatientes, pues, su incursión conlleva la comisión de diversas conductas reprochadas por la legislación penal, y la segunda, que los extrae del contexto de simples combatientes para comprender que se trata de víctimas que requieren una reparación integral, debido a que los diversos motivos por los cuales ingresan al conflicto armado interno, se soportan en la vulneración a sus Derechos Humanos (Corte Constitucional, Sentencia T-773 , 2015).

En este orden de ideas, la Corte Constitucional refiere que:

(...) la adopción de un enfoque diferencial que tome adecuadamente en cuenta las especiales afectaciones que sufren las niñas utilizadas, reclutadas u obligadas a participar en la guerra; evitar el riesgo de invisibilizarlas; propiciar su reinserción social, familiar y

comunitaria; tomar en consideración los distintos tipos de violencia de la que pudieron haber sido víctimas; y brindar atención a sus hijos e hijas (Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2018)

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, afirma que: la Ley de Víctimas se encarga de otorgar beneficios no solo a quienes son catalogados como víctimas sino a aquellos que siendo víctimas y estando al interior de los grupos armados ejecutaron hechos ilícitos, pues se considera que no serán sujetos de la ley penal por el contexto mismo en que se desarrollaron tales conductas típicas (Unicef, 2016). En el hecho del reclutamiento forzado de NNA debe analizarse las falencias frente a la garantía de la satisfacción de las necesidades básicas que se presentaron, es decir, si el Estado ha dejado de atender las obligaciones que se le ha encomendado frente a los NNA como principio general y la forma en que ha adelantar las medidas a que haya lugar para evitar que se presenten nuevamente.

El Consejo de Estado ha delimitado el tema de la reparación integral al cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1448 de 2011 en torno a las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y por ende, ha dispuesto que cuando la víctima es un NNA, se debe partir por el reconocimiento de estos como víctimas del conflicto armado y como ciudadanos para así proceder con el proceso de restitución de los derechos vulnerados (educación, salud, vivienda) y la reparación de los daños morales que corresponden al dolor, tristeza o aflicción que se padece por el daño sufrido (Consejo de Estado, Sentencia 00463, 2018)⁶

⁶ Demanda presentada en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, con el objeto que se declare administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía y Ejército Nacional y Grupo Gaula por los daños irrogados con ocasión del secuestro padecido por Fabio Botero Botero, Martha Luz García Henao y Natalia Botero García y, consecuentemente, se reparen los mismos. Las pretensiones se fundamentan en los siguientes hechos destacados por la Sala:

Seguidamente se requiere la entrega de una indemnización económica de hasta 40 salarios mínimos, pero esta regirá solo si la desvinculación del NNA se produce cuando este es menor de 18 años, y serán atendidos por el ICBF como víctimas del conflicto, frente a quienes se debe restablecer sus derechos y proteger para evitar que no se repitan los hechos victimizantes de los que fueron objeto. Cuando el NNA desvinculado cumple la mayoría de edad, la atención le corresponde a la Agencia Colombiana para la reintegración (ACR), donde son tratados como desmovilizados y deberán ajustarse a la normatividad existente para esta materia, por no existir un programa diferencial en la ACR, lo que termina haciendo que los desvinculados hagan parte del programa en el que también participan los responsables de su reclutamiento forzado (Correa, Jiménez, Ladisch, Salazar, 2014)

Una vez se determina el monto de la indemnización se generará un encargo fiduciario para los dineros destinados a la reparación del NNA los cuales podrán ser utilizados solamente por el beneficiario y dirigidos a adquirir vivienda o al pago de educación una vez el NNA cumpla la mayoría de edad y con ello adquiera la capacidad legal para la administración de dicho monto. Frente a este proceso de reparación integral consagrado legalmente y dispuesto en la Ley 1448 de 2011 se presume el acompañamiento riguroso del ICBF a fin de que se permita la construcción de un proyecto de vida para el menor víctima del conflicto armado (Corte Constitucional, 2016, Sentencia C-069).

El 28 de noviembre de 2001 a las 00.15 horas en el Municipio de Calarcá y en su casa de habitación fueron plagiados por el Frente Cincuenta y Uno de las FARC Fabio Botero Botero, Martha Luz García Henao, Natalia Botero García y Etelvina Garzón. Nueve horas después fueron dejadas en libertad Martha Luz García Henao y Etelvina Garzón. Familiares de los secuestrados entablaron negociaciones con el grupo insurgente las que concluyeron con un pago de tres mil millones de pesos (3.000.000.000) y el fin del secuestro el 13 de julio de 2002. De los antecedentes que informan la causa, el problema jurídico consiste en determinar si con fundamento en los hechos relativos al secuestro de los que fueron víctimas Fabio Botero Botero, Natalia Botero García y Martha Luz García Henao, por cuenta de integrantes del grupo armado insurgente FARC, se estructuran los elementos de la responsabilidad del Estado y, en consecuencia, surge el deber de reparar a cargo de este.

De igual forma, la Ley de victimas dispone de una política de reintegración de los NNA desvinculados del conflicto, por ende, propone una serie de estrategias que permitan el fortalecimiento de la dimensión de reparación integral como elemento indispensable para la reintegración de los NNA a una vida en sociedad desde un enfoque coherente.

Por tal motivo es pertinente mencionar al menos 4 de los ejes que corresponden al desarrollo de la política de víctimas, que tiene como primer aspecto a la oferta educativa, en los que el ICBF realiza una importante labor con los NNA, pues por regla general debe propender porque estos se encuentren escolarizados, y además buscar la posibilidad de ofrecer mediante las instituciones del Estado como el servicio Nacional de aprendizaje (SENA) cursos técnicos y tecnológicos que permita la integración económica en periodos de tiempo mucho más breves.

Otro de los ejes que incorpora la Ley 1448 de 2011 es la inserción económica y social, la cual dependerá de la posibilidad de que obtengan ingresos, para la que se ha dispuesto una modalidad de entrega de un capital semilla para el financiamiento de un proyecto productivo, el cual será entregado cuando el NNA haya cumplido 18 años y para el que deberá recibir una capacitación técnica de por lo menos 400 horas y además demostrar algún tipo de experiencia en el área productiva de este para asegurar que sea exitoso, y que pueda contribuir a definir un proyecto de vida con un sustento económico derivado de su propio trabajo, lo cual es visto como la posibilidad de reintegrarse económica y socialmente.

Con respecto al eje denominado sentido de agencia y participación, la Ley de victimas argumenta la necesidad de que los NNA desvinculados sean partícipes de la formulación de las políticas y planes; para ello, es necesario ofrecer un escenario de confianza en el que los NNA

tengan la posibilidad de hacer una declaración abierta de los hechos que en torno a su reclutamiento forzado se ejecutaron, lo que permitirá conocer los daños que se les ocasionó y así desarrollar programas y planes que se adecuen a las necesidades de reparación integral de los NNA en cada uno de los aspectos de su vida.

Ahora bien, en torno a la reparación integral de NNA la Ley de víctimas ha incorporado la implementación de un enfoque de género, que además se debe tener presente durante el proceso de reintegración, en el que se realice un análisis de los daños desde una perspectiva diferencial de los impactos que se causan dependiendo el género, y facilitando la incorporación de aquellas niñas o adolescentes que tienen hijos, lo cual refiere importancia en el momento en que se determinan las asistencias de tipo económico y psicosocial, además de la puesta en marcha de programas que permitan una atención efectiva y una orientación institucional oportuna.

La ley 1448 de 2011, en su afán por responder a un proceso de restauración como ha sido llamado el fin de la reparación integral, constituyó un sistema de atención y reparación, que involucra a todos los sectores de la institucionalidad, un mecanismo para la atención de la población que había sido víctima de flagelos como el desplazamiento forzado. Con el ánimo de ampliar la cobertura a las víctimas, se dispuso el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual se encuentra constituido por diversas instituciones, lo que hace entender que no solo la Unidad para las Víctimas es la encargada de velar por las mismas, sino que varias entidades son responsables de la atención a las víctimas.

Instituciones garantes de este proceso como el ICBF, guardan las memorias y hojas de vida de cientos de menores desvinculados que reposan en los informes CODA, voces de la

realidad de los sucesos que se presentan durante todo el tiempo que dura su enlistamiento y que deben ser la ruta de orientación de las medidas de reparación integral, para que respondan a esas necesidades que se presentan luego de su desmovilización, posicionando al proceso de reparación integral como uno de los mayores desafíos que enfrenta el Gobierno de Colombia.

Cada una de las medidas que la Ley 1448 de 2011 se orienta de cierta forma a intentar reparar lo irreparable, a brindar un alivio a los NNA por ese desajuste que incluso propicia la desmovilización pues esta a su vez conlleva un proceso de desajuste pues los jóvenes no conocen la realidad por fuera del grupo armado, se enfrentan a un escenario desconocido y hasta experimentan duelos por la pérdida de esos quehaceres diarios, a los lazos contruidos, al desapego emocional y al proyecto de vida visualizado al interior del grupo reclutador.

Por ello, la reparación integral debe ser integradora debe ir más allá de un panorama de medidas coordinadas, implica reajustar los elementos que excluyen a los desmovilizados que son mayores de 18 años reclutados siendo menores de edad, quienes también son víctimas de reclutamiento ilícito y sufren sus consecuencias, requiere la puesta en marcha a su vez de planes individuales de reparación e integración, con el fin de que las víctimas de reclutamiento forzado puedan integrarse a la vida social con oportunidades económicas y sociales como el acceso al sistema de salud y educación.

En el tema de responsabilidad del Estado por el reclutamiento forzado de NNA, es pertinente analizar los elementos que desde el plano internacional se han desarrollado y que hacen parte del bloque de Constitucionalidad, por ende, que son vinculantes y requieren de especial atención en referencia a las obligaciones del Estado para la incorporación de políticas y

programas con el objetivo de atender a los menores víctimas del conflicto armado y en especial a aquellos que han sido sujetos pasivo de reclutamiento forzado, pues tal condición implica su reconocimiento al interior de las fuerzas al margen de la ley y posterior a su desvinculación.

Así las cosas, el derecho a la reparación integral desde los postulados internacionales parte entonces de:

La existencia de un bloque de constitucionalidad; que ha incorporado al ordenamiento interno las resoluciones de órganos de protección y garantía de los derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), tanto en sus opiniones consultivas como en los fallos proferidos como consecuencia de los casos contenciosos presentados por la Comisión. De acuerdo con ese panorama, es tal el marco teórico y normativo del derecho a la reparación integral en el plano de la jurisprudencia de la Corte IDH (Noguera, 2010).

Por consiguiente, como un primer referente conceptual es pertinente mencionar la afirmación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo referente a la obligación de reparar.

El deber de reparar, cuyo sustento es el Derecho Internacional acogido en la Convención Americana, se desprende, en la especie, de las declaraciones formuladas en la sentencia acerca de las violaciones cometidas. Aquélla puede establecer dicho deber, en términos generales, y constituir, por ello, una sentencia mixta: declarativa y condenatoria; la reparación, objeto accesorio y contingente del proceso tutelar de los derechos humanos, quedaría sujeta al convenio sobre la forma de ejercer un derecho reconocido y cumplir un deber acreditado. (Rousset, 2011)

Se trata de un concepto amplio y regulador que asimila la necesidad condicionada a elementos garantistas para la protección de la víctima del conflicto armado interno, pues se entiende que la vulneración de uno o más de sus derechos contraría la obligación de prevención y protección que desarrolla el Estado frente a sus coasociados, y a su vez que desentraña un deber legítimo de reparar dichos daños. (Fundación paz y reconciliación, 2016)

La atención prioritaria a los menores víctimas requiere unas estrategias que sean capaces de entender las necesidades individualizadas, las cuales se materializan con una reparación integral, que en palabras de Uprimny (2010) debe cumplir con las medidas que implique una plena restitución, la cual exige que el Estado debe hacer todos los esfuerzos posibles para borrar los efectos del crimen y deshacer el daño causado, con el fin de restituir a la víctima a la situación en la que se encontraba antes del crimen. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, 2003)

Uprimny (2010) desarrolla el concepto de la reparación desde un contexto que con dificultad se ha identificado en Colombia para aplicarse, por ello señala que: El ideal de reparación integral sigue siendo un principio aceptado en la mayor parte de los análisis de derechos humanos, al menos de la siguiente forma:

El deber del Estado de reparar a las víctimas o sus familiares por diferentes medios (como la compensación económica) que sean proporcionales a la gravedad de la violación o a la magnitud del daño sufrido, este principio de restitución plena se torna enigmático en contextos transicionales, luego de violaciones graves y masivas a los derechos humanos.

Estas sociedades suelen enfrentar también profundas desigualdades y una amplia pobreza. Son en cierto sentido “sociedades bien desorganizadas”. En ese tipo de contextos, el principio de reparación integral entra en una tensión aguda con otros deberes del Estado, en especial con su obligación de proveer servicios sociales a todas las personas pobres, incluso si no han sido víctimas de crímenes atroces (Uprimny & Guzmán, 2010 p,241).

La reparación entonces debe estar ligada a la posibilidad de ser una verdadera reparación transformadora, en el que el Estado está en la obligación de reparar a las víctimas con consideraciones de justicia distributiva, es decir, buscar las alternativas que permitan transformar las circunstancias que pudieron ser las causas de los hechos victimizantes, pues las estrategias para reparar a las víctimas más que verlas como una solución inmediata deben verse como una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa en la que sea posible superar aquellas situaciones de desigualdad, marginalidad y exclusión social (Uprimny & Guzmán, 2010).

El concepto de reparación transformadora es un presupuesto que puede extraerse del artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 cuando se establece que la reparación integral comprende las acciones que permita superar las condiciones de desigualdad, marginalidad, exclusión y subordinación iniciales en que se encontraban las víctimas y que seguramente favorecieron la comisión del hecho victimizante; lo que significa que este tipo de reparación tiende a que la víctima pueda ser reparada con las medidas capaces de regresarla a mejores condiciones a las que se encontraba antes de producido el hecho dañoso (Uprimny, 2009).

En este orden de ideas, para que la reparación comporte ese elemento transformador debe hacer una comprensión del fenómeno del reclutamiento forzado desde el momento en que se

materializa, por ende, que ha de analizarse las características de la víctima que ha sido objeto de tal flagelo no desde su desmovilización, sino desde el momento en que acaeció su ingreso al grupo armado, lo cual implica entender que la reparación debe incluir los diferentes hechos que motivaron el reclutamiento forzado en atención a evitar la repetición de los mismos y además comprender las huellas que este dejó en cada víctima para que reparación sea una verdadera transformación de las condiciones sociales e individuales de la víctima.

Consecuentemente, que la víctima ha de analizarse en su individualidad, en dos escenarios que darán lugar a reparación integral, el primero de ellos a fin de determinar la época para la cual se perpetró el hecho de su reclutamiento forzado, la actividad desarrollada al interior del grupo armado, el tiempo que permaneció en las filas del grupo armado, si fue, a su vez, víctima de algún tipo de violencia sexual, etc.

El segundo momento corresponde a las características anteriores al hecho como su filiación, la edad de la víctima, si se encontraba estudiando, el lugar donde vivía y otros elementos que permitan determinar la calidad de vida que ostentaban, el instante en que se encontraba su proceso de desarrollo integral, y las diferentes secuelas que el reclutamiento generó en su psiquis lo cual deberá ser diagnosticado por un profesional idóneo.

Los criterios de reparación transformadora deben incluir las características que se presentan en los dos momentos como víctima de reclutamiento forzado, descritos anteriormente, sin dejar de lado que uno de los elementos que fundamenta esta reparación debe ser el entendimiento de que el suceso se presentó cuando la víctima era menor de edad, cuando ostentaba una condición de sujetos de derechos con especial protección por parte del Estado y

que, por la omisión del Estado, por fallas del servicio en algunos casos, se inmiscuyó a la población civil en un conflicto interno armado del que resultaron ser víctimas .

Dicho lo anterior, que la desmovilización se presente cuando la víctima ha cumplido la mayoría de edad no debe ser un criterio excluyente para la reparación, debe ser un elemento presente en la orientación que se le dé a esta, es decir, a las medidas de reparación a aplicar que se le otorgue a la víctima y que contribuyan a que esta pueda rehacer su proyecto de vida en el momento en que se vio truncado por el flagelo del reclutamiento, lo cual no presume tratar como niño a quien es un adulto pero sí entender que fueron interrumpidas muchas facetas que ahora deben ser reparadas como un conjunto de daños que se le causaron y que debe conllevar una satisfacción personal.

En este sentido, para que la reparación integral sea capaz de responder a los impactos del reclutamiento forzado debe incluir la integración social y comunitaria la cual se traduce en una reparación integradora y para la que es necesario poner en marcha un programa de reparación a partir de un enfoque personalizado de acompañamiento a cada NNA víctima de reclutamiento forzado, en el cual sea posible identificar sus habilidades y destrezas, las inclinaciones, aspiraciones, necesidades de apoyo psicosocial, experiencia en el área laboral y visión sobre las posibilidades de la economía local, así como necesidades de entrenamiento vocacional o educación de cada NNA.

La reparación integradora se sustenta en cinco dimensiones de particular importancia que permitirá que los NNA sean objeto de una reparación en la que el Estado sea capaz de atender los

compromisos y promesas que ha asumido en su posición de garante de los derechos fundamentales, estas son:

- (a) la construcción de un proyecto económico que contribuya a fortalecer la capacidad de los jóvenes de sentirse y asumirse agentes, disfrutar de seguridad económica y de percibir los beneficio de ser parte de la sociedad; (b) la oferta educativa en los programas de reintegración y reparación, encaminada a fortalecer los mismos aspectos; (c) la modalidad para incorporar sus experiencias violentas en procesos terapéuticos y en su compromiso con la sociedad; (d) la inclusión en estas medidas de una perspectiva de género, y (e) la incorporación de una dimensión comunitaria en el proceso. (Centro Internacional para la Justicia Transicional, p. 34, 2014)

Ahora bien, dentro de las medidas que el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas despliega, están la evaluación de la política de atención y reparación integral a las víctimas, el proceso de gestión documental y normativa , la convocatoria a las reuniones de participación social, así mismo, debe realizar las solicitudes al Departamento Nacional de Planeación para que este le presente los informes anuales sobre el resultado de la política en mención a fin de evaluarla periódicamente y determinar cuáles son las falencias que la misma ha tenido en la práctica (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral SNARIV, 2016)

Uno de los elementos generales que se disponen en las medidas de atención a las víctimas precisamente es la creación de subcomités, los cuales deben responder a requerimientos establecidos en los decretos reglamentarios de la ley; constituyéndose los mismos en la responsabilidad fundamental del proceso de reparación, para obtener eficacia del mismo, tal y

como lo contempla la Ley 1448, pues son los encargados del diseño e implementación del proceso entre ellos el enfoque diferencial.

Es una mirada conceptual, que aporta de manera fundamental a la garantía del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. De acuerdo con el Modelo Enfoque Diferencial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Se concibe como un método de análisis y actuación, que reconoce las inequidades, riesgos y vulnerabilidades y valora las capacidades y la diversidad de un determinado sujeto - individual o colectivo-, para incidir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública, con miras a garantizar el goce efectivo de derechos. Se implementa a través de: acciones afirmativas, adecuación de la oferta institucional, desarrollo de oferta especializada (ICBF, 2013, p. 10).

La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 19 de octubre de 2007 manifestó que conocía a cabalidad la jurisprudencia de la Corte IDH sobre la reparación integral, y por eso reconoce que su esfuerzo más grande debe ir encaminado a enfocarse en los derechos de las víctimas y proteger de modo efectivo los derechos humanos entendiéndolos como derechos naturales inherentes al ser humano.

Por consiguiente, la línea jurisprudencial del Consejo de Estado en consideración a la reparación por violaciones a los derechos humanos, ha estado apoyada en la doctrina precedente incorporada desde el año 2007 como antes se mencionó, y en el año 2014 bajo el radicado 32998, esta Corporación unificó los criterios que se venían exponiendo en la jurisprudencia sobre la clasificación de los daños inmateriales y el título de la falla en el servicio por graves violaciones a

los derechos humanos, en el que el control de convencionalidad aunque en construcción al interior del Consejo de Estado, se presenta como una herramienta para que el juez identifique las obligaciones vinculantes a cargo del Estado y las responsabilidades que le atiende respecto de estas (Consejo de Estado, radicado 32998, 2014)

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de reparaciones ha intentado adecuarse a los estándares que la Corte IDH ha dispuesto en torno a la reparación integral cuando se trata de hechos en los que se configura una vulneración grave y flagrante a los derechos humanos, por ende, esta Corporación ha hecho uso del control de convencionalidad y para ello ha reconocido un amplio margen de aplicabilidad de la jurisprudencia de la Corte IDH, indicando la relevancia que tiene para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano

De esta forma se concluye que la reparación con vocación transformadora e integradora es precisamente un resultado del desarrollo de los principios de reparación que consagra la Corte Interamericana de Derechos Humanos incorporada al ordenamiento jurídico de Colombia y argumentada ampliamente en la sección tercera de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la cual impone al Estado la obligación más allá de reparar los hechos, de cambiar las condiciones de vida de las víctimas aun las que tenían antes de los hechos victimizantes, con medidas que impacten en la estructura que genera la victimización, una política integral y coordinada, con medidas de discriminación positiva que entienda la realidad individual de cada víctima.

Conclusiones

En el contexto normativo en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado, y en especial el título de imputación denominado falla en el servicio es el que ha sido estudiado en torno al tema del reclutamiento forzado de menores, por tratarse de hechos en los que el Estado ha dejado de atender sus obligaciones con dicha población. Sin embargo, no se encuentra precedente de fallos del Consejo de Estado en las que se haya impuesto una condena a cargo del Estado Colombiano como consecuencia del reclutamiento forzado de un NNA, lo cual supone que no existe un desarrollo jurisprudencial del tema de la reparación integral en lo que atiende exclusivamente a reparar a los menores que se han desvinculado de las filas de los grupos al margen de la ley, y que el procedimiento adoptado corresponde a la reparación integral en torno a las graves violaciones al interior del conflicto armado.

Como una respuesta positiva en torno a la reparación integral, se hace necesario materializar las obligaciones que el Estado tiene para prevenir el reclutamiento forzado de NNA. Para ello, debe partirse por reiterar que los NNA son sujetos de especial protección, que debe garantizárseles un trato preferente y diferenciado y que su incursión en el conflicto armado conlleva la vulneración de múltiples derechos.

El Estado está en la obligación de desarrollar un proceso de reparación integral que comporte elementos individualizados y dirigidos exclusivamente a los menores en el conflicto, situación que implica un detallado estudio interdisciplinar pues los daños que se les causa no deben tasarse en una simple indemnización pecuniaria que es lo que en la actualidad se viene realizando.

Es claro, que el diseño de las diferentes estrategias que soportan la reparación integral propuesta por la ley de víctimas es ambicioso, y quizá uno de los programas de reparación a víctimas más desarrollados, pues pretende desplegar una serie de componentes para cumplir los objetivos que consolide una verdadera política pública de víctimas, en la que se dispone de diferentes líneas de acción como la verdad y justicia, la atención psicosocial, el enfoque diferencial, el mejoramiento de vivienda, retornos, seguridad alimentaria y satisfacción de garantías de no repetición.

Los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplían el panorama de medidas y las definen con claridad contrario a lo que por reparación integral se viene adelantando en Colombia, a partir de la Ley 1448 de 2011, pues la Corte IDH ha entendido la reparación integral como un proceso transformador en el que es necesario partir de los impactos que cada NNA ha sufrido a consecuencia del hecho víctimizante, las condiciones que dieron lugar al reclutamiento forzado, la situación durante el tiempo en que estuvo reclutado y las condiciones que se le deben ofrecer tras la desvinculación.

Por consiguiente, existen serias diferencias que implican la necesidad de una realidad normativa acorde con dichos preceptos de rango superior, por ello, se considera que se requiere de un estudio diferenciado del conflicto armado que vive el país, de los actores armados, y más aún de las víctimas, en el caso de los menores, para entender que se trata de un foco de vulneración de derechos que deben ser reparados en la medida en que permitan reintegrarlos a su vida normal, que permita ofrecerles un marco de posibilidades para el desarrollo de su plan de vida, y en especial eliminar los factores de riesgo como la falta de atención a sus necesidades básicas.

El estudio permite destacar que la Ley 1448 de 2011 ratifica la condición de víctimas de los NNA colombianos que han sido reclutados forzosamente, y la obligación estatal de restablecer los derechos que se les ha vulnerado, mediante una reparación integral transformadora y reparadora en la que se ha dispuesto de diversos ejes que permiten entender la reparación como un sistema que debe contener medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, y satisfacción, así como la garantía de no repetición.

Por consiguiente, si bien se argumentó sobre las diversas medidas que comporta la reparación transformadora se presenta como una forma novedosa de reparar, se estima que su aceptación dispone una serie de rupturas al principio de igualdad de las víctimas con un marco de posibilidades para que un juez falle a favor de las víctimas pero sin una conciencia económica de las posibilidades del Estado de cumplirlas, convirtiendo las condenas en lo que ha sido denominado como un populismo jurídico alejado del futuro económico del país lo cual no es conveniente para una democracia.

A partir de esta visión de reparación integral transformadora e integradora se crea la necesidad de rediseñar la política de reparación dirigida específicamente a las víctimas del reclutamiento forzado, en la que sea posible ver al NNA como un ciudadano en formación sujeto de derechos para el que debe adelantarse un plan individual de reparación, a dicha política pública se deberá acompañar por una estrategia de prevención del reclutamiento forzado, de las condiciones sociales, políticas y económicas que posibilitan los factores de riesgo para su concreción.

La reparación integral debe verse desde una visión crítica que entiende las necesidades de reparar a los NNA víctimas pero con el conocimiento y entendimiento que las víctimas en Colombia son apenas uno de los grupos vulnerables que existen, y que por ende, debe fraguarse cada política pública en los límites reales para una democratización social y económica del país

en torno al cumplimiento de cada una de las obligaciones que demanda los fines del Estado, sin desbordarse en las capacidades, pues esto ha sido el motivo principal por el que hoy día la reparación integral sea un constructo jurídico muy bien argumentado pero ineficiente en la práctica, pues la reparación integral aún no ha logrado su cometido y con dificultad la reparación transformadora será un modelo presente en la realidad de Colombia.

Referencias Bibliográficas

- Alarcón-Palacio, Y (2019). Reclutamiento forzado de niños y niñas (abduction) en el conflicto armado colombiano: los menores de 18 años como víctimas con protección especial reforzada en el DIH y DIDH. Vniversitas, 138.
- Arango, M.(2010). El bloque de Constitucional en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, Recuperado de: <https://doi.org/10.18046/prec.v0.1406>
- Asamblea General de la ONU (2005). Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005 por la cual se establecen los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
- Bohórquez, R. M. C. (2012). Los rastros del conflicto colombiano y las políticas para niñas, niños y jóvenes desvinculados de grupos armados. Trabajo social (Universidad Nacional de Colombia), (14), 117-126.
- Bruno, R. C. (2014). Las medidas de reparación en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: alcances y criterios para su determinación (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata).
- Calderón, J. (2013).La reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: estándares aplicados al nuevo paradigma mexicano. Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3567/11.pdf>
- Castellanos Santos, S. (2013). Analisis del reclutamiento forzado a menores de edad en colombia (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario).
- Centro internacional para la justicia transicional.(2014).Reparación integradora para niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito en Colombia. Recuperado de: www.ictj.org/es

- Centro Nacional de Memoria Histórica, (2018). Sujetos victimizados y daños causados balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. Recuperado de:
http://centrodememoriahistorica.gov.co/wpcontent/uploads/2020/01/SUJETOS_VICTIMIZADOS_Y_DANYOS_CAUSADOS.pdf
- CICR. (2008). Cuál es la definición de conflicto armado según el derecho internacional humanitario? Recuperado de: <https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf>
- CNN EN ESPAÑOL. (16 Agosto, 2017) FARC entregaron 132 menores de edad ¿Dónde está el resto? Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2017/08/16/farc-entregaron-132-menores-de-edad-donde-esta-el-resto>
- Collazos González, M. A., & Sacristán Piñeros, C. (2015). Mecanismos implementados por el estado Colombiano para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito y desplazamiento forzado.
- Comisión Colombiana de juristas. (2014) El delito invisible. Criterio para la investigación del delito de reclutamiento ilícito de niños y niñas en Colombia. Recuperado de:
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/el_delito_invisible_2014.pdf
- Comité de Derechos Humanos. (1990). Comunicación No. 195/1985. CCPR/C/39/D/195/1985. Caso William Delgado Páez Vs Colombia. Estados Unidos. Minnessotta.
- Comité Internacional de la Cruz Roja. (1977) Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
- Congreso de la Republica (1991). Ley 12 (enero 22 de 1991) Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989". Bogotá Diario Oficial No. 39.640

Congreso de la Republica (1999) Ley 548 por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 (diciembre 26 de 1997) y se dictan otras disposiciones. Art 13 Bogotá Diario Oficial 43.827.

Congreso de la Republica (2006). Ley 1098 (noviembre 8 de 2006) por la cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia. Bogotá Diario Oficial No 46446 Artículo 2.

Congreso de la Republica Colombia, Ley 418 (diciembre 26 de 1997) Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C, Diario Oficial 4320 Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Normal.jsp?i=6372>

Congreso de la Republica de Colombia. Ley 599 (julio 24 de 2000) Por la cual se expide el Código Penal. Bogotá D.C, Diario oficial 44097

Consejo de Estado (1995). Expediente. 8118. Consejero ponente: Juan de Dios Montes Hernández. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2005). 85001-23-31-000-1993-00074-01(14170). Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2006). Expediente. 13168. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2011). Expediente (17613), Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá D.C

Consejo de Estado (2012).Expediente N° 22366. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2015) Expediente (31412). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2015).Expediente (32912). Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá. D.C

Consejo de Estado (2016).Sentencia 2005-02813, 2016.Magistrado ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2017). Radicación 03381. Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2017). Sentencia 2003-03842/35613. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2017).Radicación (33976).Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2018). Concepto 2362 de 2018. Consejero ponente: Alvaro Namén Vargas. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2018). Sentencia 00005 de 2018. Consejero Ponente: Danilo Rojas Betancourth. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2018). Sentencia 00463 de 2018. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá D.C

Consejo de Estado (2018). Sentencia 2011-00253, Expediente (21884). Consejero Ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez. Bogotá D.C

Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 93. 7 de julio de 1991 (Colombia).

Correa, C, Jiménez, A, Ladisch, V, Salazar, G. (2014). Reparación integradora, para niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia. Recuperado de:

<https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Informe-Colombia-Reparacion-reclutamiento-illegal-2014.pdf>

Corte Constitucional Sentencia. (2005). Sentencia C- 203 de 2005. Magistrado Ponente.

Manuel José Cepeda Espinosa. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (1992). Sentencia T-406/1992. Magistrado ponente: Ciro Angarita Barón.

Bogotá D.C

Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-333/96. Magistrado ponente: Alejandro Martínez

Caballero. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2013) Sentencia de Unificación 254/2013. Magistrado ponente: Luis

Ernesto Vargas Silva. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2013). Sentencia C- 579. Magistrado Sustanciador. Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub. Bogota D.C

Corte Constitucional. (2013). Sentencia T- 388/2013. Magistrado ponente: Alejandro Martínez

Caballero. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2015). Sentencia T-773/15. Magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero

Pérez. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2016). Sentencia C- 069/16. Magistrado Ponente: Luis Guillermo

Guerrero Pérez. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2016). Sentencia C-069-2016. Análisis realizado por Derecho del

Bienestar Familiar. Bogotá D.C.

Corte Constitucional. (2017). Sentencia C-286/17. Magistrado sustanciadora: Gloria Stella

Ortiz Delgado. Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2018) Sentencia C-007/18. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera.

Bogotá D.C

Corte Constitucional. (2018). Comunicado N° 8 de 1 de Marzo de 2018. Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera. Bogotá D.C

Corte Constitucional.(2010), Sentencia C-055/10. Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez. Bogotá D.C

Corte Constitucional.(2009). Sentencia C-240 de 2009. Magistrado Ponente: Mauricio Gonzalez Cuervo. Bogotá D.C

Corte Constitucional.(2013).Sentencia T-438/2013. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Rios. Bogotá D.C

Corte Interamericana de Derechos Humano. (2012). Nadege Dorzema y otros Vs. República. San José de Costa Rica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. (2003). Sentencia de 18 de septiembre de 2003, fondo, reparaciones y costas, par 72. Serie C No. 100. Recuperado de:
<http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>

Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.(2013). Resolución medidas provisionales respecto de la Republica de Colombia. Bogotá D.C

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (1988). "Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 28 de julio de 1988. Serie C: Resoluciones y Sentencias N 4, Secretaría de la Corte, San José de Costa Rica, 1988, pág. 78.)

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Caso Yarce y otras Vs Colombia. Sentencia del 22 de noviembre de 2016. Recuperado de:
[//www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf)

Corte Interamericana de Derechos Humanos.(2003). Caso Bulancio vs Argentina. Sentencia 18 de Septiembre de 2003.Recuperado de:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos.(2012) Caso *Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana*, Secretaría de la Corte, San José de Costa Rica.

- Corte Suprema de Justicia.(2011). Sentencia 34145. Magistrado ponente: Sigifredo Espinoza Pérez. Bogotá D.C
- Cosoy, N. (Septiembre 3 de 2016). La firma formal de los acuerdos de paz de Colombia con las FARC será el 26 de septiembre en Cartagena. BBC mundo. Recuperado de:
<http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37263263>
- Cubides, J. (2016). Reparaciones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. D.C, Colombia.
- De Zuribia, N (2019) ¿Qué es la reparación integral? ¿cuáles son sus componentes como están contemplados en la ley y en la jurisprudencia? Corporación Excelencia en la Justicia. Recuperado de: <https://cej.org.co/wp-content/uploads/2019/12/La-reparacio%CC%81n-integral-y-sus-componentes.pdf>
- Defensoría del Pueblo. (2014). Informe defensorial, prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Recuperado de:
<https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/informedefensorialreclutamiento.pdf>
- Defensoría del pueblo. (2018). Informe de Gobierno Política de atención y reparación a víctimas. Recuperado de: <http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/politica-de-atencion-reparacion-victimas.pdf>
- Díaz Bonilla, P. A. (2010). Reparación al daño proyecto de vida en víctimas de reclutamiento forzoso perpetrado por organizaciones paramilitares (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Trabajo Social. Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, PIUPC).
- Duque Morales, C. R., & Torres Restrepo, L. M. (2015). Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de paz.

Echeverry, J. (4 de junio de 2017). la inconclusa entrega de niños reclutados por las Farc.

Recuperado de: <http://www.elmundo.com/noticia/La-inconclusa-entrega-de-niños-reclutados-por-las-Farc/53450>

Ferrajoli, L. (2006). Universitas. *Revista de Filosofía, Derecho y Política*, núm. 3, verano de 2006. ISSN 1698-7950, p. 3-39.

Ferrajoli, L. (2009). Democracia constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la Constitución y sus garantías. En L. Ferrajoli, J.J Moreso, y M. Atienza. La teoría del derecho en el paradigma constitucional. (2ª ed.). Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo .

Ferrajoli, L.(2005). “Los fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, pp.

1921. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/28220698_L_FERRAJOLI_Los_fundamentos_de_los_derechos_fundamentales_Madrid_Trotta_2001

Finard, M. (2016) El pensamiento social y normativo del adolescente internado en instituciones de minoridad; sus nociones acerca de la responsabilidad, la participación, las leyes, las sanciones, roles e instituciones sociales y políticos. Disponible en:

<http://www.oei.es/valores2/finardi.htm>

Florián, H. (2016). Reflexiones sobre la responsabilidad del Estado y el derecho a la

reparación. Recuperado de: <http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/algunas-reflexiones-sobre-el-concepto-de-la-responsabilidad-del-estado-y-el-derecho-a-la-reparación/>

Floriano-Escobar, R. (2015). El reclutamiento ilegal de los menores en Colombia y su responsabilidad penal dentro del conflicto armado. *Principia Iuris*, 12(23), 217-235.

Gallón, G & Reed, M. Eds. (2016) Principios internacionales sobre impunidad y

reparaciones.pág.6. Recuperado de:

http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/principios_sobre_impunidad_y_reparaciones.pdf p. 231-235

Gil, Botero, E. (2010). Responsabilidad Extracontractual del Estado, cuarta edición, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Gil, Botero, E.(2013) Responsabilidad extracontractual del Estado, 6.^a ed., Bogotá, Temis.

Gómez, J. (17 de febrero de 2017). Los niños de las Farc: el conflicto de la desmovilización de menores en Colombia. Actualidad. Recuperado de:

<https://actualidad.rt.com/actualidad/231346-ninos-farc-conflicto-desmovilizacion-menores>

Gonzales, B. (2013). El derecho de las víctimas a la indemnización por vía administrativa.

Revista semana. Edición N° 00369. Recuperado de:

<http://viva.org.co/cajavirtual/svc0369/articulo05.html>

Gonzales, O. (2010) Responsabilidad del Estado en Colombia: responsabilidad por el hecho de las leyes. Recuperado de: [file:///C:/Users/toshiba/Downloads/104-1-1429-1-10-](file:///C:/Users/toshiba/Downloads/104-1-1429-1-10-20100222.pdf)

[20100222.pdf](file:///C:/Users/toshiba/Downloads/104-1-1429-1-10-20100222.pdf)

González, C. (2012). Responsabilidad extracontractual del estado. Una aproximación desde la teoría de la responsabilidad de los clásicos a su carácter de disciplina autónoma del derecho. (Tesis de posgrado). Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia.

Guecha, Ciro. (2012). La falla en el servicio una imputación tradicional de Responsabilidad del Estado. *Revista prolegómenos*. Derechos y valores –p.p.95-109

- Guerra, D. (2016). La reparación integral objetivo de la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos humanos y su tendencia a los procesos de reparación directa. (Tesis doctoral).Universidad de Salamanca., Salamanca. España.
- Guglielmucci, A. (2017). El concepto de víctima en el campo de los derechos humanos: una reflexión crítica a partir de su aplicación en Argentina y Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (59), 83-97.
- Henao, J. C. (1998). El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado.
- Henao, J. C. (1998). El daño: análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado.
- Henao, Pérez, J.(1996). La responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano. Jornadas Colombo Venezolanas de Derecho público. Recuperado de:
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1392/12.pdf>
- Human Rights Watch. "Aprenderás a no llorar". Niños combatientes en Colombia, 2003. p, 5
 [citado el 15 de Noviembre de 2017] Recuperado de:
<http://www.acnur.org/t3/uploads/pics/186.pdf?view=1>
- Irisarri, C. (2000). El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado colombiana. (Tesis de pregrado).Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. D.C. Colombia
- López Murcia, J., & Acosta López, J. (2006). ASISTENCIA ESTATAL A LOS DESPLAZADOS Y REPARACIONES EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. *International Law: Revista Colombiana De Derecho Internacional*, 4(8). Recuperado de:
<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/14003>

- Mariño Rojas, C. (2012) Derechos de los niños y niñas reclutados o utilizados en hostilidades en la justicia transicional en Colombia: evolución normativa y prácticas jurídicas. En Artículo de reflexión basado en los resultados del informe final de la investigación vinculada a la línea sobre el conflicto y niñez en Colombia. En criterio jurídico Garantista. Bogotá, año 3 No 6, pág. 81
- Mazo, L & Valencia, L.(2016). Implementación de la medida de satisfacción como mecanismo para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno colombiano en el municipio de Bello en el marco de la ley 1448 de 2011. Recuperado de:
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/5271/TCSP_MazoArangoLinaMarecela_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Medina, C. (2009), “No porque seas paraco o seas guerrillero tienes que ser un animal”. Procesos de socialización en FARC-EP, ELN y grupos paramilitares (1996-2006), Bogotá: Editorial Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política-CESO
- Ministerio de Defensa Nacional. (2007). Directiva 012 Memorias al congreso 2007-2008 pág. 30 [citado: julio 17 de 2016].Recuperado de:
https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Documentos_Home/MEMORIA_S-2007-2008.pdf.
- Ministerio de Justicia y del Derecho. (2013). Prevención de la delincuencia e jóvenes y adolescentes: conversaciones regionales desde una perspectiva de derechos, incluir, concurrir, Restaurar y proteger: claves para la construcción de una ciudadanía plena, Bogotá, págs.25-26 Recuperado de: www.minjusticia.gov.co
- Molina, O. (2010). Responsabilidad del Estado. Universidad central de Chile. Santiago.
 Recuperadode:
file:///C:/Users/toshiba/Downloads/RESPONSABILIDAD_DEL_ESTADOfinal.pdf

- Moreno, Cruz, Rodolfo. (2007). El modelo garantista de Luigi Ferrajoli: Lineamientos generales. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 40 (120), 825-852. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332007000300006&Ing=es&tIng=es.
- Motta, C, D. & Baracaldo, A, D. (2010) Responsabilidad civil extracontractual del Estado Colombiano por violación a los Derechos Humanos. Bogotá: Fondo de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Colombia.
- Naciones Unidas. (2011). Protección jurídica internacional de los Derechos Humanos Durante los conflictos armados. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_SP.pdf
- Naciones Unidas.(2012). Consejo de Seguridad recapitulación. Recuperado de: <https://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2012/>
- Naeve, K. (2012). Derechos, deber o privilegio. Una evaluación del impacto de los programas de Reintegración del gobierno para los niños desvinculados en Colombia. (Tesis de maestría). Haarvard Kennedy School. Bogotá D.C, Colombia.
- Nash, C. (2009). Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1988-2007). Segunda edición. Santa Elena, Santiago de Chile. Andros impresores
- Noguera, Sánchez, H. (2010). Consejo de Estado Vs Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones. Tesis de maestría. Bogotá: Universidad Santo Tomas, Facultad de Derecho. Pág. 22 Recuperado de: <http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/24/consejo-de-estado-vs-corte-interamericana-de-derechos-humanos-en-materia-de-reparaciones.pdf>
- Núñez, R & Zuluaga, L. (2013). Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano. *Revista análisis internacional*, (10), 207-230

- Observatorio de memoria y conflicto del centro nacional de memoria histórica. (Febrero 10 de 2018). El reclutamiento forzado de menores en cifras. El espectador. Recuperado de:
<https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-reclutamiento-forzado-de-menores-en-cifras>
- Olivares, Carrillo, H. (2018). Dignidad Humana: un análisis discurso y jurídico del concepto a partir de su función teórica y práctica en Colombia. (Tesis de maestría). Universidad Libre. Bogotá, Colombia, Recuperado de:
<https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11733/Dignidad%20Humana-%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Organización de las Naciones Unidas. (20 de Marzo de 2018).Gobierno le pide a la ONU documentar casos de menores que FARC no entregaron. *El tiempo*. Recuperado de:
<https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/informe-de-onu-revela-que-farc-no-entrego-a-todos-los-ninos-reclutados-195800>
- Patiño, H. (2011). Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. *Revista de Derecho Privado* (0123-4366), (20).
- Portilla, A, & Correa, C. (2015).Estudio Sobre la Implementación del programa de Reparación individual en Colombia. Bogotá, Pág. 1-60. Recuperado de:
<https://www.ictj.org/es/news/estudio-reparacion-individual-victimas-Colombia>
- Procuraduría General de la Nación-Unicef .(2006).Lineamientos jurídicos y administrativos del Estado Colombiano para la atención a los niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado Bogotá DC, Editorial Gente Nueva. Pág. 38
- Ramírez, P, A. (2010).El reclutamiento de menores en el conflicto armado colombiano. Aproximaciones al crimen de guerra. *Revista derecho penal y criminología*. XXXI, (90), 115-136

Red Nacional de Información. (2019). Cifras unidad de víctimas. Recuperado de

<http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Victimizaciones?vvg=2>

Rodríguez, J. (2011). La protección de los niños en los conflictos armados por el Derecho

Internacional Humanitario. Los niños soldados. AFDUAM. Recuperado de:

<https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/15/Jose%20Luis%20Rgez.pdf>

Rodríguez, Pineda, P. (2019). Dos aristas del iusnaturalismo y su incidencia dentro del contexto

jurídico colombiano. Revista estudiantil de derecho privado. Universidad Externado de

Colombia. Bogotá, Colombia, Recuperado de:

<https://red.uexternado.edu.co/wpcontent/uploads/sites/48/2019/12/Art%C3%ADculo-Pablo.pdf>

Rosero, L.F.T. (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques:

Ciencia Política y Administración Pública, 11(18), 55-75.

Ruiz, W. (2013). Responsabilidad del Estado y sus regímenes. (Tercera segunda). Bogotá

D.C: Editorial Ecoe ediciones

Ruiz, W. (2014). Responsabilidad del Estado y sus regímenes. (Tercera edición). Bogotá

D.C: Editorial Ecoe ediciones

Salamanca, Bejarano. (2017). El rol y la responsabilidad del Estado en el caso del delito de

reclutamiento forzado de menores. Recuperada de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14958/1/EL%20ROL%20Y%20RESPONSABILIDAD%20DEL%20ESTADO%20EN%20EL%20CASO%20DEL%20DELITO%20DE%20RECLUTAMIENTO%20FORZADO.pdf>

Sánchez, G. (15 de febrero de 2018). Los niños y adolescentes no son vistos como sujetos

históricos en el conflicto. *El espectador*. Recuperado de:

<https://www.elespectador.com/noticias/paz/los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-son-vistos-como-sujetos-historicos-en-el-conflicto-articulo-739409>

Sánchez, N. (10 de febrero de 2018). Una guerra hecha con niños y adolescentes. (En Colombia todos los grupos han reclutado niños). *El Espectador*. Recuperado de:

<https://colombia2020.elespectador.com/pais/una-guerra-hecha-con-ninos-y-adolescentes>

Sandoval, Garrido, D. (2013). Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extra patrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. *Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia*, No. 25, julio-diciembre, 2013, p. 235-271

Santofimio, J.(2014) Régimen de víctimas y responsabilidad del Estado una aproximación al derecho de daños desde la convencionalidad y la constitucionalidad ponencia presentada en el Foro Interamericana de Derecho Administrativo, ciudad de México

Siri, A. J. R. (2011). El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Internacional de Derechos Humanos*, (1).

Sistema Nacional de Atención y Reparación integral SNARIV. (2016) Recuperado de:

<http://www.unidadvictimas.gov.co>

Springer, N. (2012). Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. Image Printing. Bogotá, Colombia.

Steiner, C. (2007). Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. Pág. 71-75 Recuperado de: http://www.kas.de/wf/doc/kas_31766-1522-4-30.pdf?121011222421

Torres, J. (2016). La teoría del garantismo: poder y constitución en el Estado contemporáneo.

Revista de derecho N 47, Fundación Universidad del Norte, Recuperado de:

<https://www.redalyc.org/jatsRepo/851/85150088005/html/index.html>

Unicef. (2013). Unicef fondo de las naciones unidas para la infancia. Recuperado de:

<http://www.un.org/youthenvoy/es/2013/09/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia/>

Unicef. (2015). Protección de la infancia y derechos civiles. [consultada 10 de Diciembre de 2017] p.90. Recuperada de:

http://www.unicef.org/spanish/specialsession/about/sgreportpdf/sgrep_adapt_part2c_sp.pdf

Unicef. (2016). Elementos de análisis normativo para la comprensión de la vinculación de los niños y niñas y adolescentes a grupos armados ilegales, pág. 2 [citado: julio 17 de 2018]

Recuperado de: http://www.unicef.org/colombia/pdf/co_resources_ID9_conclus.pdf

Unicef.(2018). Informe de reclutamiento y utilización de niños en conflicto Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano. Recuperado de: <https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/informe-de-reclutamiento-y-utilizacion-de-ninos-en-conflicto>

Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. (2013) Derecho a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Recuperado de:

<http://escuela.unidadvictimas.gov.co/cartillas/derechoreparacion.pdf>

Uprimny, R & Guzmán, D. (Julio- Diciembre 2010). En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales. Scielo.

Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/ilrdi/n17/n17a07.pdf>

Uprimny, R. (2000). El bloque de constitucionalidad en Colombia un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal. Recuperado de: <https://www.dejusticia.org/wp-content>

Uprimny, R. (2009). Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Centro internacional para la justicia transicional, Dejusticia. Bogotá D.C

Villalta Vizcarra, A. E. (2014). Solución de controversias en el Derecho Internacional. Comité Jurídico Interamericano, XLI Curso de Derecho Internacional, Río de Janeiro, Organización de Estados Americanos, 15-35. Zubiria, Posada, N. (2019).